



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha 17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

5 DE FEBRERO DE 1997

Suplemento al 5678

No. 10946

DECRETO No. 202

LIC. ROBERTO MADRAZO PINTADO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 51, FRACCION I, DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL: A SUS HABITANTES SABED:

LIBRO PRIMERO.

Que el II. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente:

LA QUINGUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 36, FRACCIONES I Y XXXIX, DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL Y EN BASE A LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO

En la última década se ha hecho evidente, de una parte, la aparición de nuevas formas de antisocialidad y, de otra, un incremento considerable de la criminalidad ya contemplada en los vigentes códigos penales de la Republica Mexicana. En otras palabras, la normatividad penal vigente ha sido rebasada por la realidad social subyacente. En diversa perspectiva, el marco teórico que sirve de sustento a dichos códigos y, entre ellos, obviamente al del Estado de Tabasco, resulta incompatible con el progreso que ha venido operando en el campo de las teorías penales. Por estas razones, el Ejecutivo y el Poder Judicial del Estado, conscientes de la gravedad del problema, han emprendido una labor conjunta para renovar normativamente toda la materia penal.

Como parte de esta labor, se ha elaborado un Proyecto de Código Penal que contiene, además de una nueva conceptualización, una nueva estructura normativa, orientadas una y otra a corporeizar un instrumento que cumpla cabalmente su función de prevención general y prevención especial de los delitos.

En todo momento -y esto se enfatiza- se cuidó, en un sentido, que la nueva normatividad responda a las necesidades sociales del pueblo de Tabasco y, en otro, que al incorporar las modernas teorías no se cayera en afiliaciones doctrinarias que dificultaran la interpretación y aplicación concreta de las normas. Es decir, se procuró crear las condiciones normativas propicias para garantizar al pueblo de Tabasco una adecuada administración de justicia penal.

1. El Libro Primero se inicia con el Título relativo a la "Ley Penal", donde se organizan los ámbitos de validez de la ley penal: Validez espacial (Capítulo I), Validez temporal (Capítulo II) y Validez personal (Capítulo III). Además, se establecen, por primera vez, las reglas completas para el "Concurso aparente de normas"; su redacción es tan precisa en cada caso que el juez sabrá siempre cuál es la norma aplicable, ya que no hay entre ellas zonas de confusión.

2. En el Título Segundo, y en capítulos separados, se ubican las reglas generales concernientes al delito: las formas de comisión, la tentativa, la responsabilidad de las personas jurídicas colectivas, el concurso de delitos y las excluyentes de incriminación penal. Merecen especial mención las siguientes materias:

A) Se introduce, por primera vez, a la normatividad penal, la llamada "comisión por omisión". Para regularla se ponderaron las diversas variantes legislativas y, como consecuencia, se optó por incluir, en el Libro Primero, un conjunto de reglas que estipulan, con carácter limitativo, el subconjunto (número de cláusulas) reducido de tipos de acción con resultado material que van a extenderse para abarcar la comisión por omisión. Estas reglas, comunes a todos los tipos de acción con resultado material que podrán concretizarse por omisión, recogen, en fórmulas específicas, las situaciones concretas de la vida (fundamentos fácticos), generadoras del deber de actuar para evitar el resultado material, es decir, las fuentes por las que se adquiere la calidad de garante del bien jurídico. Así, para no dar margen a problemas de índole civil, se prefirió la "aceptación efectiva de una obligación" en lugar del contrato; y se optó por circunscritas relaciones de parentesco garantizadoras de específicos bienes jurídicos en vez de una fuente tan amplia como lo es la ley. Asimismo, el propio actuar precedente queda reducido al que se realiza en forma culposa o fortuita, ya que no es posible un actuar precedente doloso, el cual, por sí mismo, configura una acción dolosa y, por tanto, constituye una comisión por acción. La pertenencia a una concreta comunidad de vida o de peligro cierra el conjunto de fuentes generadoras de la calidad de garante y del deber de actuar para evitar el resultado material. Por último, los requisitos relacionados con la eficacia de la inactividad y con la posibilidad real de actuar para impedir el resultado material, constituyen auténticos cerrojos a la arbitrariedad (artículo 9).

B) Se determina que las acciones y omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente, con lo cual, además de eliminarse la inadecuada terminología de delitos intencionales y no intencionales o de imprudencia, se suprime la preterintención, criticada por los iuspenalistas por no tener existencia autónoma, ya que se trata de una comisión culposa asociada a una intención que tiene relevancia únicamente a nivel de individualización judicial (artículo 10).

Por cuanto a las conceptualizaciones, el dolo se define en base al conocimiento y querer de los elementos objetivos del hecho típico, en lo cual es unánime la doctrina más avanzada. La culpa contiene, por primera vez, su aspecto fundamental: la posibilidad de proveer el cuidado para no producir, o en su caso evitar, la lesión del bien jurídico.

C) En el Capítulo III, referente a la tentativa, además de su conceptualización, se regula el desistimiento y el arrepentimiento activo y eficaz, incorporados ya por las legislaciones más actualizadas (artículo 11).

D) La supresión, en el Libro Primero, del texto legal que doctrinariamente ha generado la denominada "autoría y participación", o como se denomina en el Código Penal vigente del Estado de Tabasco: "personas responsables de los delitos", y su sustitución, en el Título Primero de la Sección Tercera del Libro Segundo, por un conjunto de artículos que regulan toda la materia que contenía el texto legal cancelado, viene a ser, sin duda alguna, la innovación más importante, ya que va a posibilitar mejores soluciones en la vida cotidiana de los tribunales. Este cambio tan profundo en la normatividad penal tiene un fundamento racional muy sólido: según el "nullum crimen, nulla poena sine lege", las únicas acciones u omisiones que pueden constituir delito son las previamente descritas en un tipo penal y, por definición, quien realiza tales acciones u omisiones recibe el nombre de autor directo o material. Por estas razones, la regulación de esta materia en el Libro Primero da lugar, en su aplicación, a múltiples problemas de la más variada índole, problemas que, con la nueva regulación, quedan completamente subsanados con la consiguiente facilidad en el manejo del Código Penal.

Por otra parte, la autoría indeterminada, establecida en diversos ordenamientos penales, por ser, simplemente, un caso de insuficiencia de pruebas, queda incluida en una regla especial de aplicación de sanciones y, por ello, todo su contenido se pasó al correspondiente Título de aplicación de sanciones.

Por otra parte, la autoría indeterminada, establecida en diversos ordenamientos penales, por ser, simplemente, un caso de insuficiencia de pruebas, queda incluida en una regla especial de aplicación de sanciones y, por ello, todo su contenido se pasó al correspondiente Título de aplicación de sanciones.

F) El Capítulo V (artículo 14) contiene el catálogo completo de los aspectos que, en la doctrina más avanzada, se consideran causas de exclusión del delito o causas excluyentes de incriminación. Especial comentario ameritan:

I. El consentimiento del titular del bien jurídico o de quien esté legitimado por la ley para otorgarlo, del cual se precisan los requisitos para su operancia: bien disponible, otorgante con capacidad jurídica de disposición libre y ausencia de vicios de la voluntad. Se recogen, asimismo, los supuestos de presunción fundada del consentimiento.

II. El trastorno mental transitorio, que comprende al miedo grave, es previsto como la única causa que elimina al delito y, por ende, a la aplicación de la sanción, no así la inimputabilidad permanente, que no excluye al delito, sino que fundamenta la aplicación de medidas de seguridad. No se incluye una fórmula completa de la inimputabilidad, sino únicamente el trastorno mental transitorio, porque no se trata de saber qué es la inimputabilidad sino, tan sólo, de saber cuándo queda excluido el delito y, por tanto, la sanción.

III. Se introdujeron todas las situaciones de necesidad que pueden constreñir al sujeto activo en el momento en que realiza la conducta típica. Entre ellas queda ubicado el temor fundado generado por una amenaza. Se consagra, también como excluyente, el principio que sustenta a las situaciones de necesidad: el sujeto actúa para salvar un bien jurídico y no tiene otra alternativa de actuación no lesiva o menos lesiva, realidad ésta que da contenido a la situación de la no exigibilidad de la conducta adecuada a la norma.

IV. Se normativiza, de manera expresa, el impedimento insuperable, que está

relacionado con la concreción omisiva de los tipos, no así el impedimento legítimo que, como se recomienda por la doctrina, se cancela como autónoma causa excluyente de incriminación por estar subsumida en el cumplimiento de un deber.

V. Se omitió la obediencia jerárquica, y ello por constituir una fuente incontrolada de injusticias.

VI. El error bajo el cual un sujeto puede realizar la actividad o inactividad típica quedó previsto en forma completa en sus tres variantes: 1) el error invencible sobre alguno de los elementos objetivos del hecho típico, que excluye al dolo; 2) el error invencible sobre la ilicitud de la conducta, que deja intacto al dolo y sólo elimina a la culpabilidad, y 3) el error sobre exculpantes. Aquí es importante aclarar que, en cuanto a la primera clase de error, a diferencia de algunos códigos penales que se refieren al "error sobre elementos esenciales del tipo" (error de tipo), el Proyecto señala claramente que el error está en relación con los elementos del "hecho típico", ya que en esta clase de error el problema no estriba en que se conozca, o no, la descripción legal en el momento de cometer la actividad o inactividad típica, sino en que se conozca, o no, el hecho concreto que se adecua a la descripción legal o se tenga una falsa apreciación de él, lo cual quiere decir que el error que interesa en el ámbito de la conducta (del dolo) no es un error de tipo, sino un error sobre la facticidad. El error vencible, que sí amerita sanción, es considerado en el Título relativo a la aplicación de sanciones.

VII. Cabe señalar que en el vigente Código Penal del Estado de Tabasco está contenida, entre las "circunstancias excluyentes de responsabilidad", una excluyente que no es una regla general. Se trata de una excepción específica del encubrimiento por favorecimiento, que en el Proyecto pasó a tomar su lugar adecuado en el Libro Segundo.

VIII. En un párrafo independiente se prescribe algo especialmente importante: las excluyentes de incriminación se harán valer de oficio y, hay que subrayarlo, son aplicables a los inimputables. Esto último significa un paso más en la justicia que merece este grupo de personas tan desvalidas.

3. En el Título Tercero, destinado a las penas y medidas de seguridad, destacan:

A) El tratamiento en libertad, la semilibertad y el trabajo en favor de la comunidad, además de operar como sustitutivos penales, son contemplados como penas alternativas aplicables en forma directa. En el ámbito de las penas alternativas, se posibilita la libertad en supuestos de delincuencia menor (artículo 17).

B) En lugar de la prohibición de ir a lugar determinado se establece la "prohibición de concurrencia o residencia", más amplia y más acorde con la función asignada (artículo 23).

C) Se separa la multa de la reparación de daños y perjuicios, por tratarse de materias de diversa naturaleza.

La reparación de daños y perjuicios se aparta por completo de la solución que le da el Código de 1931: el considerarla como pena pública, no ha solucionado el problema de su ineficacia en cuanto al pago, y si, en cambio, ha desvirtuado su naturaleza. Aunque la finalidad de esta determinación fue la de servir a la víctima del delito, los resultados obtenidos hasta ahora han sido negativos: pocas veces se logra el pago de la reparación de los daños y perjuicios. El Proyecto adopta una forma mixta. En principio se reconoce su verdadera naturaleza civil y se permite al ofendido intervenir, de manera directa, ante la autoridad correspondiente, pero se deja la puerta abierta para que el Ministerio Público intervenga en forma subsidiaria (artículo 31).

Se incorporan, con base en la Constitución Federal, diversas prerrogativas y derechos que dan solución a muchos de los reclamos de las víctimas del delito.

D) En lugar de la vigilancia de la autoridad se introduce la supervisión de la autoridad, que especifica más el alcance de esta pena (artículo 45).

E) Se regulan, en forma más precisa y benéfica para el inimputable, los casos de tratamiento en internamiento o en libertad (artículos 47, 48 y 49).

F) En relación a las personas jurídicas colectivas se prevé, como sanción, la intervención, remoción y prohibición de realizar determinadas operaciones así como la extinción de dichas personas, sin olvidar que la responsabilidad penal es estrictamente personal. Sin embargo, la penalización, en el sentido en que se plantea en el Proyecto, se ha considerado indispensable. Debe señalarse que se cuidó, en forma especial, dejar a salvo los derechos de los trabajadores y de los acreedores (artículos 50 a 55).

4. En el Título Cuarto, correspondiente a la aplicación de sanciones:

A) Las reglas generales consideran, entre otros aspectos específicos: la magnitud de la lesión o de la puesta en peligro del bien; las condiciones fisiológicas y psíquicas en que se encontraba el activo en el momento de la comisión del delito; la extracción urbana o rural del agente; el desempleo, o la índole de su empleo o subempleo y la mayor o menor marginación o incorporación al desarrollo biológico, económico, político y cultural; los motivos que se tuvieron para delinquir: generosos, altruistas, fútiles, egoístas o perversos, con lo cual se proporcionan al juzgador líneas precisas para el cumplimiento de su delicada función. Cabe señalar que se excluye toda mención a los términos de peligrosidad y temibilidad, propias de los sistemas autoritarios, para darle aplicación plena al principio de culpabilidad que garantiza más la justicia penal.

Por otra parte, en el mismo apartado de la individualización judicial se contemplan dos reglas de especial trascendencia humanitaria: a) Se tomarán en cuenta los usos y costumbres de los grupos étnicos indígenas en cuanto sean relevantes para la individualización de la sanción, y b) el juez podrá prescindir total o parcialmente de la importancia de una pena en el supuesto de que la aplicación sea notoriamente innecesaria o irracional; cuando el activo haya sufrido consecuencias graves en su persona o, cuando el agente presente semilibertad o padecer una enfermedad grave e incurable y/o avanzada.

B) Se introduce, en relación a la culpa, un cambio radical. El Código Penal de Tabasco, actualmente en vigor, conserva el sistema de general crimen culpa (variante del numerus apertus), lo que significa criminalizar sin ponderación alguna. Dicho sistema ha sido criticado por los especialistas de la materia, quienes proponen en su lugar el sistema de específicos crimina culpa (variante del numerus clausus). Este sistema, adoptado en el Proyecto, conlleva una criminalización racional. El artículo 61 establece, en forma específica, los delitos que pueden ser sancionados en su realización culposa. La punibilidad correspondiente se precisa en tal forma que, en su aplicación concreta, será imposible que la sanción para la comisión culposa sea mayor que la de la comisión dolosa.

C) Se prevé la imputabilidad disminuida como una situación intermedia entre la imputabilidad y la falta total de la capacidad de comprender la significación del hecho y de actuar conforme a dicha comprensión. Por tal razón se le asocia como punibilidad las dos terceras partes de la sanción aplicable al delito cometido, ya que merece un tratamiento especial.

D) En cuanto al error vencible que excluye al dolo pero deja subsistente la culpa, en consonancia con este efecto, se sancionará con la punibilidad correspondiente al delito culposo (artículo 65). El error vencible sobre la ilicitud de la conducta o sobre la exhibibilidad, solo atenúa la culpabilidad; por tanto, la sanción debe ser compatible con esta simple atenuación: la tercera parte de la sanción correspondiente al delito de que se trate.

En caso de exceso en las excluyentes de incriminación, por error vencible, por las mismas razones se le impondrá la tercera parte de la sanción que corresponda al delito de que se trate (artículo 66).

E) La autoría indeterminada, como ya se anotó al tratar la supresión del tema de las personas responsables de los delitos, no es sino un supuesto de insuficiencia de pruebas cuando varios sujetos intervienen en la comisión de un delito y no consta quién produjo el resultado. Ante tal situación, a todos se les aplicará las dos terceras partes de la punibilidad correspondiente.

LIBRO SEGUNDO

El Libro Segundo, como lo han afirmado los especialistas, refleja claramente la ideología, la cultura y el régimen político y económico que impera en el lugar de vigencia del ordenamiento penal.

Se trata de un catálogo de conductas sancionables, donde el bien jurídico es el elemento fundamental en la estructura de los tipos penales que contiene, ya que precisamente la protección de bienes es la razón de la pena y, en última instancia, del Derecho penal. En este sentido, el bien jurídico debe ser la base para la ordenación sistemática de los tipos penales.

En la actualidad, la ideología dominante está orientada a rescatar al ser humano individualmente considerado y, como consecuencia, se ha impulsado y desarrollado una cultura de los derechos humanos, que se entienden con la connotación, entre otras, de limitación al abuso de poder.

En este orden de ideas, se considera que en un ordenamiento punitivo los bienes que están directamente conectados con los individuos son los que deben protegerse en primer lugar; en segundo, los que están en relación con la familia; en tercero, los relativos a la sociedad; en un siguiente lugar, los que correspondan al pueblo soberano y, finalmente, los concernientes al Estado.

Con estas ideas, el Proyecto se estructuró con cinco secciones, integradas por títulos y capítulos, todos ellos organizados con base en los bienes jurídicos que se protegen en cada caso.

La Sección Primera se ocupa de los "Delitos contra las personas" y comprende las siguientes categorías: Delitos contra la vida y la salud personal (Título Primero); Delitos contra la seguridad personal (Título Segundo); Delitos contra la libertad personal (Título Tercero); Delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual (Título Cuarto); Delitos contra la paz y la seguridad de las personas (Título Quinto); Delitos contra la inviolabilidad del domicilio (Título Sexto); Delitos contra la intimidad personal (Título Séptimo); Delitos contra la inviolabilidad del secreto (Título Octavo); Delitos contra la buena fama (Título Noveno); Delitos contra el patrimonio (Título Décimo).

La Sección Segunda contiene todos los "Delitos contra la Familia" y se integra con cuatro categorías: Delitos contra la seguridad de la subsistencia familiar (Título Primero); Delitos contra el ejercicio de los derechos familiares (Título Segundo); Delitos contra la filiación (Título Tercero); Delitos contra la institución del matrimonio y el orden sexual (Título Cuarto).

La Sección Tercera: "Delitos contra la Sociedad", comprende: Delitos contra la seguridad de los bienes jurídicos (Título Primero); Delitos contra el erario y el servicio públicos (Título Segundo); Delitos contra las garantías rectoras del procedimiento penal (Título Tercero); Delitos contra la rectitud de la función persecutoria y de la judicatura (Título Cuarto); Delitos contra la administración de justicia (Título Quinto); Delitos contra la veracidad necesaria para la adecuada administración de justicia (Título Sexto); Delitos contra el ejercicio legítimo de la autoridad (Título Séptimo); Delitos contra el respeto de los símbolos institucionales (Título Octavo); Delitos contra el equilibrio vital de la naturaleza (Título Noveno); Delitos contra la seguridad colectiva (Título Décimo); Delitos contra la seguridad de la comunicación (Título Decimoprimer); Delitos contra la fe pública (Título Decimosegundo); Delitos contra la autenticidad o veracidad documental (Título Decimotercero); Delitos contra la moralidad pública (Título Decimocuarto); Delitos contra el respeto a los muertos (Título Decimoquinto); Delitos contra la seguridad pública (Título Decimosexto); Delitos contra la prestación adecuada del servicio profesional (Título Decimoséptimo).

La Sección Cuarta: "Delitos contra la autonomía del pueblo de Tabasco", se compone de un sólo Título que recoge todos los "Delitos electorales".

Finalmente, la Sección Quinta: "Delitos contra el Estado de Tabasco", se reduce a un sólo Título: Delitos contra la Seguridad interior del Estado.

Como puede advertirse, todos los títulos mencionados en las diversas secciones hacen referencia a los bienes jurídicos que se protegen; es decir, su ordenación obedece al elemento rector: bien jurídico, no como actualmente acontece en los códigos que rigen en toda la República, en los que, con una anarquía metódica y de técnica legislativa, se adoptan criterios diversos. Además, en cada sección, se hace una jerarquización de los mismos bienes y, de acuerdo con ella, se ordenan tanto los títulos como los capítulos y los tipos, y a cada uno de estos últimos se le asocia la punibilidad acorde y proporcional al valor de los bienes y de la magnitud del ataque a éstos a través de la conducta prohibida.

Estas, y no otras, son las directrices que deben seguirse en la elaboración de un Código Penal.

Es importante subrayar que en este Proyecto, con base en la necesidad social de dar protección adecuada a los bienes hasta ahora no tutelados, se crearon nuevas figuras delictivas. Para precisar la protección penal y delimitar la materia de la prohibición se reformularon algunos tipos. Además, en orden al principio de proporcionalidad y, atendiendo al aumento desmedido de criminalidad, se incrementaron algunas punibilidades. Asimismo, se suprimieron algunos tipos por considerar que el bien protegido en ellos se ha desvalorado y, por tanto, no ameritan la tutela penal, por ejemplo, la vagancia y la malvivencia, los golpes y otras violencias físicas simples y las injurias.

Los comentarios al Libro Segundo quedarán reducidos a los tipos y a los aspectos más significativos. En consecuencia, no se hará referencia a todos los títulos que configuran las diversas secciones.

SECCION PRIMERA TITULO PRIMERO

A) El parricidio y el infanticidio se conjuntan para integrar una sola figura delictiva en la que se adiciona, también, la muerte ocasionada al hermano, al cónyuge, concubina o concubinario, adoptante y adoptado, pero se agrega un requisito esencial: que el sujeto activo quebrante la fe o seguridad que el pasivo debía esperar de aquél por la real y actual relación de confianza existente entre ambos en el caso concreto. Así se evitan injusticias, por la grave sanción aplicable, cuando, por ejemplo, se priva de la vida a un ascendiente o descendiente, con el cual no sólo no existe confianza, sino una declarada enemistad (artículo 111).

B) En el homicidio se omiten, por innecesarias las reglas relativas al nexo causal y al límite de los noventa días relacionado con el resultado material. En cuanto a esta referencia temporal, la supresión cancela la posibilidad de injusticias, ya que, en virtud de los adelantos médicos, se puede prolongar la vida por más de noventa días y, con ello, ya no se configuraría el homicidio.

C) Las calificativas se proponen como situaciones específicas comprendidas en cinco fracciones. La premeditación desaparece por tratarse de una situación que no difiere del dolo, ya que nada importa para efectos de punibilidad que el sujeto persista en el ánimo de cometer el homicidio o reflexione sobre él, pues con esta

relevante para la individualización judicial de la pena. Por su parte, la ventaja era una situación que quedaba incluida en la alevosía y, esta última, expresamente, era abarcada por la traición. En resumen, de las cuatro calificativas, tradicionalmente conocidas, quedaron dos, a las que se adicionaron tres situaciones más redactadas de manera más clara (artículo 123).

D) Las diversas categorías de lesiones quedan claramente clasificadas y sancionadas atendiendo a los bienes jurídicos que se protegen (artículos 116 a 119).

E) Se eliminan las figuras de conyugicidio y de homicidio del corruptor de la hija y se sustituyen por el homicidio por emoción violenta, figura adoptada en las legislaciones más modernas. En su formulación se señala lo que debe entenderse por emoción violenta, para evitar interpretaciones equivocadas (artículo 127).

TITULO TERCERO

A) Dentro de los delitos contra la libertad, al secuestro, que es una de las conductas más graves que actualmente padece nuestra comunidad, se le sanciona con severidad: hasta cuarenta años de prisión. Se prevé una sanción reducida para los casos en que el activo libere espontáneamente a la víctima dentro de un plazo de tres días: esto, para propiciar la liberación de la víctima (artículos 143 a 145). Por esta misma razón, tratándose de simple privación de libertad, si la víctima es liberada sólo se aplica la mitad de la sanción correspondiente (artículo 142).

B) La rufianería relevada en el Título por ser un delito contra la libertad personal, no entra en la libertad sexual (artículos 146 y 147).

TITULO CUARTO

A) En este Título "Delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual", se incluye la definición de cópula constitutiva de la violación, para no incurrir en errores al momento de aplicar la ley (artículo 148).

B) Al estupro se le agrega en su conceptualización el elemento definitorio de esta figura delictiva: el normal desarrollo psicosexual. En esta forma es más comprensible el bien jurídico tutelado (artículo 153).

C) Se adiciona, en este rubro, la inseminación artificial sin consentimiento de la ofendida, o con el consentimiento de quien carece de la capacidad para comprender el significado del hecho, por ser una conducta que constituye un grave abuso contra la mujer (artículo 154).

TITULO QUINTO

En los "Delitos contra la paz y la seguridad de las personas" se desincorporan el disparo de arma de fuego y el ataque peligroso, porque las conductas que las definen quedan subsumidas en las conductas propias del homicidio o de las lesiones. Solamente quedan contenidos el asalto y las amenazas (artículos 160 y 161).

TITULO SEPTIMO

Se protege, en un Capítulo Único, la intimidad personal frente a quien, utilizando medios de cualquier naturaleza, escuche, observe, transmita, grabe o reproduzca imágenes o sonidos o se apodere de documentos privados (artículo 163).

TITULO NOVENO

A) En este Título: "Delitos contra la buena fama", que en el Código Penal "bienes contra el honor", se excluyen los golpes y otras violencias simples y las "injurias", en virtud de que tales conductas deben sancionarse como infracciones administrativas, porque los bienes protegidos en ellos son de menor entidad de los que deben tutelarse en la legislación penal. En consecuencia, únicamente se conservan la Difamación y la Calumnia (artículos 166 a 171).

TITULO DECIMO

A) En los "Delitos contra el patrimonio", materia de este Título, se puso especial cuidado en las hipótesis calificadas de robo (catorce) en razón de la incidencia de dichas figuras delictivas y, además, porque se les sanciona en forma considerablemente agravada (artículos 179 y 180).

B) Igual reflexión mereció el abigeato, delito que ocurre con frecuencia en el Estado de Tabasco. Se explicitan los diversos supuestos que responden plenamente a las necesidades sociales y se les asocian punibilidades proporcionales (artículos 181 a 186).

C) En atención al fraude, se revisaron acuciosamente los llamados fraudes específicos hasta ahora regulados, para hacer una depuración y conservar, tan sólo, las figuras auténticamente específicas y suprimir del catálogo los supuestos que en realidad son casos particulares del fraude genérico (artículo 191).

D) Regulación especial se da a la administración fraudulenta, para proteger a quienes confían sus bienes a personas que, aparentando buena fe al momento de realizar las operaciones, con posterioridad aprovechan su situación de administradores para obtener lucros indebidos (artículo 192).

E) Se instituye la usura, en la que incurrn personas sin escrúpulos que, para obtener ganancias ilícitas, explotan la necesidad económica de las personas (artículo 195).

F) El encubrimiento por receptación se distingue del encubrimiento por favorecimiento, por la naturaleza de cada uno de ellos. El primero, es de carácter patrimonial porque trae aparejados lucros ilícitos para el encubridor; en tanto que el segundo, por favorecer al delincuente en busca de su impunidad, se ubica en el ámbito de los delitos contra la administración de justicia (artículo 201).

G) Bajo el nombre de operaciones con recursos de procedencia ilícita se recogen las conductas conocidas comúnmente como "lavado de dinero", conductas que, aun cuando afectan la economía de los países y hasta las relaciones de carácter internacional, afectan primordialmente, en forma directa e inmediata, el patrimonio de las personas, por lo cual se sitúan en este Título (artículo 202).

H) Quedan, además comprendidos en el mismo Título el abuso de confianza, la retención indebida, los delitos cometidos por fraccionados; la insolencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, la extorsión y los daños.

I) En disposiciones comunes a todos los delitos contra el patrimonio se previenen casos en los que se prescinde de la sanción, o ésta se aminora considerablemente cuando hay restitución del objeto y pago de daños y perjuicios, solución, ésta, que es la que conviene a las víctimas. Se excluyen de estas reglas, por obvias razones, los delitos calificados y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, (artículo 203).

SECCION SEGUNDA

"Los Delitos contra la familia" reflejan en el Proyecto, la importancia que tienen en el ámbito social. Así, en consonancia con su jerarquía, se les dedica toda la Sección Segunda del Libro Segundo, en el que se reúnen todos los textos penales que vienen dispersos en varios títulos del vigente Código Penal, y a los cuales se suman nuevas figuras para colmar las lagunas que se advierten en la normatividad vigente. En la nueva sección, los delitos quedan agrupados en cuatro categorías: "Delitos contra la seguridad de la subsistencia familiar" (Título Primero), "Delitos contra el ejercicio de los derechos familiares" (Título Segundo), "Delitos contra la filiación" (Título Tercero), y "Delitos contra la institución del matrimonio y el orden sexual" (Título Cuarto).

SECCION TERCERA TITULO PRIMERO

A) Los "Delitos contra la seguridad de los bienes jurídicos" recogen todo el contenido del texto legal que se refiere a las distintas formas en que un sujeto puede intervenir en la comisión de los delitos. Así, comparativamente con el artículo 13 del Código Penal Federal, la "Comisión de delito por medio de otra persona" (Capítulo I), corresponde a la fracción IV del citado artículo 13; la "Instigación a cometer delito" (Capítulo II), sustituye a la fracción V; la "Ayuda en la comisión de un delito" (Capítulo III), viene a ser lo mismo que la fracción VI; la "Ayuda al autor de un delito" (Capítulo IV), aloja el contenido de la fracción VII, y el "Acuerdo en la comisión de un delito" (Capítulo V), sustituye a la primera hipótesis de la fracción I. A su vez, la "Omisión de impedir la comisión de un delito" (Capítulo VI), ocupa el lugar del artículo 14.

En cuanto a las fracciones II y III del propio artículo 13, quedan, por innecesarias y redundantes, canceladas, ya que las conductas descritas en ellas son, exactamente, las que aparecen descritas en todos y cada uno de los tipos del Libro Segundo.

Independientemente, quedan comprendidas en este Título, la provocación a la comisión de un delito, la apología del delito y la asociación delictuosa.

TITULO SEGUNDO

A) Este Título: "Delitos contra el erario y el servicio público", sustituye al de "Delitos cometidos por servidores públicos," que figura en el Título Octavo del Código Penal vigente. La razón del cambio en el rubro se debe a que el ordenamiento vigente no atiende a los bienes jurídicos que se protegen mediante los tipos ahí comprendidos. La normatividad que integra el Título se mantiene apegada a los lineamientos seguidos en la legislación penal federal.

TITULOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO

La disección de los "Delitos cometidos por servidores públicos", que con la misma denominación aparecen en dos diferentes títulos del vigente Código Penal, y su reordenación en nuevos títulos elaborados no con base en el sujeto del delito, sino en atención a los bienes protegidos (criterio rector de todo el Libro Segundo), es uno de los cambios invariablemente aplazados por el legislador. El Proyecto agrupa los delitos respectivos en cuatro categorías: "Delitos contra el erario y el servicio públicos" (Título Segundo), "Delitos contra las garantías rectoras del procedimiento penal" (Título Tercero), "Delitos contra la rectitud de la función persecutoria y de la judicatura" (Título Cuarto) y "Delitos contra la administración de justicia" (Título Quinto). Estos cambios van a reflejarse en una más efectiva prevención general de los delitos respectivos y, además, van a propiciar una mejor interpretación y aplicación de la normatividad penal relativa.

TITULO SEXTO

Los "Delitos contra la veracidad necesaria para la adecuada administración de justicia" constituyen el complemento de los delitos contenidos en los anteriores Títulos Tercero, Cuarto y Quinto.

TITULO DECIMOPRIMERO

A) En los "Delitos contra la seguridad de la comunicación", se incluyen, con una más adecuada sistematización basada en los bienes jurídicos tutelados, los tipos que antes quedaban comprendidos en el Título de "Ataques a las vías de comunicación". En esta nueva normatividad se distribuye la materia en seis capítulos diversos: "Interrupción o dificultamiento del servicio público de comunicación" (Capítulo I); "Supresión de dispositivos o de señales de seguridad" (Capítulo II); "Conducción indebida de vehículos" (Capítulo III); "Violación de correspondencia" (Capítulo IV); "Violación de la comunicación privada" (Capítulo V), e "Incumplimiento del deber de trasladar comunicaciones al destinatario" (Capítulo VI).

TITULOS DECIMOSEGUNDO Y DECIMOTERCERO

Los delitos que en el Código vigente se encuentran reunidos bajo el rubro genérico de "Falsedad", que alude a las conductas delictivas y no a los bienes que se protegen, se organizan en el Proyecto con las denominaciones de "Delitos contra la fe pública" y "Delitos contra la autenticidad y veracidad documental". Es importante destacar que en los "Delitos contra la autenticidad y veracidad documental" se cancelaron los textos sumamente casuísticos actualmente vigentes y, en su lugar, se elaboraron fórmulas generales y precisas que atiendan a los principios de generalización y diferenciación. Esta nueva organización y mejor formulación específica de los tipos, va a resultar fecunda en el ámbito de la interpretación y aplicación de la normatividad.

TITULO DECIMOCUARTO

A) Bajo la denominación de "Delitos contra la moralidad pública" se prevén únicamente los delitos de Lenocinio (artículos 327 y 328) y de Corrupción de menores (artículos 329 a 334). La provocación o apología del delito, que está situada en este Título en el Código penal vigente, pasó a la Sección Tercera, Título Primero, de este Proyecto, por tratarse de un tipo que no protege un bien específico sino tutela genéricamente la seguridad de los bienes jurídicos. Asimismo, el Capítulo de "Ultrajes a la moral pública" se eliminó por tutelar intereses de carácter estrictamente moral que no son de la jerarquía de los que tienen cabida en el Código Penal. En la Corrupción de menores, la sanción se aumenta en una mitad cuando con los actos de corrupción el menor adquiere hábitos dañinos.

TITULO DECIMOSEXTO

En el título anotado que contiene un Capítulo Único: "Portación y fabricación de armas prohibidas", se establecen, de manera expresa las que se consideran armas prohibidas, pero en virtud de ser esta materia especialmente importante en estos tiempos en que la violencia no tiene medida, se deja la puerta abierta a otros objetos con la frase: "y otros semejantes que se utilicen para agredir" (artículo 338).

TITULO DECIMOSEPTIMO

El Título: "Delitos contra la prestación adecuada del servicio profesional", abarca los Capítulos relativos al "Abandono de la prestación de servicios", la "Negación de servicio médico", las "Operaciones quirúrgicas indebidas", el "Requerimiento arbitrario de la contraprestación" (del servicio profesional), la "Retención de cadáver" y la "Enajenación fraudulenta de medicinas nocivas o inapropiadas". Con la descripción de las figuras delictivas anotadas, se cubre la materia a la que se alude en el Título

SECCION CUARTA

En el Título: "Delitos contra la autonomía del pueblo de Tabasco", en el Título Único se incorporan los delitos electorales, ya contemplados en la legislación penal federal. A este respecto, el Proyecto no introduce ningún cambio.

SECCION QUINTA

Aquí se ubican los "Delitos contra el Estado de Tabasco", en el Título Único: "Delitos contra la seguridad interior del Estado" Aquí se incluyen los delitos considerados comúnmente en todos los códigos penales mexicanos: Rebelión, Terrorismo, Sabotaje, Asonada o motín, y Sedición.

DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA

La querrela es una institución propia del derecho procesal penal y no del derecho punitivo. Por esta razón, el Proyecto es omiso en esta materia y el catálogo de los delitos perseguibles por querrela va incluido integralmente, en el Proyecto de Código de Procedimientos Penales.

Que este Honorable Congreso está facultado con fundamento en el artículo 36, fracciones I y XXXIX de la Constitución Política Local, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social, por lo que en consecuencia ha tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETO No. 202

ARTICULO ÚNICO: Se aprueba el Código Penal para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO

LIBRO PRIMERO
PARTE GENERALTITULO PRIMERO
LEY PENALCAPITULO I
VALIDEZ ESPACIAL

Artículo 1.- Este Código se aplicará en el Estado de Tabasco por los delitos cometidos en el territorio de esta entidad federativa que sean de la competencia de sus tribunales.

Artículo 2.- Se aplicará también por los delitos:

I.- Instantáneos cometidos en otra entidad federativa cuando produzcan efectos dentro del territorio de Tabasco;

II.- Permanentes o continuados cometidos en otra entidad federativa y que se sigan cometiendo en el Estado de Tabasco.

CAPITULO II
VALIDEZ TEMPORAL

Artículo 3.- Es aplicable la ley penal vigente en el tiempo de realización del delito.

Artículo 4.- Cuando entre la comisión de un delito y la correspondiente extinción de la pena o medida de seguridad entre en vigor otra ley aplicable al caso, se estará de oficio a lo dispuesto en la ley más favorable al agente.

CAPITULO III
VALIDEZ PERSONAL

Artículo 5.- Este Código se aplicará a todas las personas a partir de los diecisiete años de edad.

CAPITULO IV
LEYES ESPECIALES Y CONCURSO APARENTE
DE NORMAS

Artículo 6.- Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero si en una ley local especial, se aplicará esta última y, en lo conducente, las disposiciones del presente Código.

Artículo 7.- Cuando una misma materia esté regulada por diversas disposiciones penales: la especial prevalecerá sobre la general, la de mayor entidad progresiva absorberá a la de menor entidad, la del hecho posterior de agotamiento cederá ante la del hecho anterior, y la subsidiaria se aplicará sólo cuando no sea posible aplicar la principal.

TITULO SEGUNDO
EL DELITOCAPITULO I
FORMAS DE COMISION

Artículo 8.- El delito es:

I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos.

II.- Permanente, cuando la consumación se prolonga en el tiempo.

III.- Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo se viola el mismo precepto legal.

Artículo 9.- El delito puede ser realizado por acción o por omisión. Quien omite evitar un resultado material descrito en un tipo de acción será considerado autor del mismo solo si: de acuerdo con las circunstancias podía evitarlo, era garante del bien jurídico y su inactividad es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el tipo. Es garante del bien jurídico el que: a) aceptó efectivamente su custodia; b) voluntariamente formaba parte de una concreta comunidad que afronta peligros de la naturaleza; c) con una culposa o fortuita actividad precedente generó el peligro para el bien jurídico, o d) se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia.

Artículo 10.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente.

Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico, quiere o acepta su realización.

Obra culposamente el que no provee el cuidado posible y adecuado para no producir, o en su caso evitar, la previsible y evitable lesión típica del bien jurídico.

CAPITULO II TENTATIVA

Artículo 11.- Existe tentativa punible cuando la intención se exterioriza ejecutando la actividad que debía de producir el delito u omitiendo la que debería de evitarlo si, por causas ajenas a la voluntad del agente, no hay consumación pero sí puesta en peligro del bien jurídico.

Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá sanción alguna; pero si la acción u omisión ejecutada constituyen por sí mismas algún delito distinto, se aplicará a éste la pena o medida de seguridad que corresponda.

CAPITULO III PERSONAS JURIDICAS COLECTIVAS

Artículo 12.- Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica colectiva, con excepción de las entidades públicas, cometa algún delito usando medios que para tal objeto le proporcione la misma persona jurídica colectiva de modo que el delito resulte cometido a su nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el juez impondrá en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente y con intervención del representante legal, las consecuencias jurídicas previstas en este Código independientemente de la responsabilidad de las personas físicas por los delitos cometidos.

CAPITULO IV CONCURSO DE DELITOS

Artículo 13.- Existe concurso real cuando con pluralidad de acciones u omisiones se cometen varios delitos.

Hay concurso ideal cuando con una sola acción u omisión se cometen varios delitos.

CAPITULO V EXCLUYENTES DE INCRIMINACION PENAL

Artículo 14.- La incriminación penal se excluye cuando:

I.- El hecho se realiza sin intervención de la voluntad del agente.

II.- Falta alguno de los elementos descritos en el tipo penal.

III.- Se actúa con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado o de quien se halla legitimado por la ley para otorgarlo, siempre y cuando se integren los requisitos siguientes:

a) Que se trate de un bien jurídico disponible;

b) Que el titular o quien esté legitimado para consentir tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien;

c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio de la voluntad. Se presume que hay consentimiento tácito cuando el hecho se realice en circunstancias tales que permitan suponer fundadamente, que de haberse consultado al titular o a quien esté legitimado para consentir, estos hubiesen otorgado el consentimiento.

IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad racional de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.

Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause un daño racionalmente necesario a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetrar sin derecho al lugar donde habitan, aunque sea en forma temporal, el que se defiende o su familia o cualquier persona respecto de las que el inculpado tenga el mismo deber de defender, o a sus dependencias, o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los cuales se tenga la misma obligación.

Igual presunción favorecerá al que cause un daño a un intruso en el momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión.

V.- Se obra por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, y que éste no tenga el deber jurídico de afrontarlo, siempre que no exista a su alcance otro medio practicable y menos perjudicial.

VI.- Se obra legalmente en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada.

VII.- Se obra bajo amenaza irresistible de un mal real o inminente en bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que no exista a su alcance otro medio practicable y menos perjudicial.

VIII.- Se omite por impedimento insuperable, la acción prevista en un tipo penal.

IX.- Al realizar el hecho típico el agente padezca un trastorno mental transitorio que le impida comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse de acuerdo con esa comprensión, a no ser que el agente hubiese provocado dolosamente o por culpa grave su propio trastorno. En este caso responderá por el hecho cometido.

X.- Se realiza la acción o la omisión bajo un error inexcusable sobre:

a) Alguno de los elementos objetivos del hecho típico.

b) La ilicitud de la conducta ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma o porque crea que está justificada su conducta.

c) Exculpantes.

XI.- Se obra para salvar un bien jurídico y no se tiene otra alternativa de actuación no lesiva o menos lesiva.

Las excluyentes de incriminación penal se harán valer de oficio y son aplicables también a los inimputables.

Artículo 15.- Cuando se encuentre considerablemente disminuida la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de conducirse de acuerdo con esa comprensión se estará a lo dispuesto en el artículo 64.

TITULO TERCERO PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPITULO I PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 16.- Las penas y medidas de seguridad son:

I.- Prisión.

II.- Semilibertad.

III.- Trabajo en favor de la comunidad.

IV.- Tratamiento en libertad de imputables.

V.- Confinamiento.

VI.- Prohibición de concurrencia o residencia.

VII.- Multa.

VIII.- Reparación de daños y perjuicios.

IX.- Decomiso.

X.- Amonestación.

XI.- Apercibimiento y caución de no delinquir.

XII.- Suspensión o privación de derechos.

XIII.- Destitución e inhabilitación.

XIV.- Supervisión de la autoridad.

XV.- Publicación de sentencia.

XVI.- Tratamiento en internamiento o en libertad de imputables.

XVII.- Intervención, remoción, prohibición de realizar determinadas operaciones y extinción de las personas jurídicas colectivas.

Artículo 17.- El tratamiento en libertad, la semilibertad y el trabajo en favor de la comunidad pueden operar como penas autónomas aplicables directamente o como sustitutivos de la prisión, en los términos que determine este Código. Su duración, en caso de operar como sustitutivo penal, no podrá exceder a la duración de la sanción sustituida.

CAPITULO II PRISION

La privación de libertad corporativa podrá ser menor de tres meses ni mayor de cincuenta años. Su ejecución se llevará a cabo en las dependencias del Ejecutivo del Estado o del Ejecutivo Federal conforme a lo dispuesto en la legislación correspondiente y a la resolución judicial respectiva.

En toda pena de prisión se computará el tiempo de detención.

CAPITULO III SEMILIBERTAD

Artículo 19.- La semilibertad consiste en la privación de libertad alternada con tratamiento en libertad. Se aplicará y se cumplirá, según las circunstancias del caso, de la manera siguiente: externación durante la semana de trabajo o educativa y reclusión de fin de semana; salida de fin de semana, con reclusión durante el resto de la semana; salida diurna con reclusión nocturna; o salida nocturna y reclusión diurna.

CAPITULO IV TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD.

Artículo 20.- El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas, educativas, de asistencia o servicio social, o en instituciones privadas de asistencia no lucrativas.

El Trabajo en favor de la comunidad en ningún caso se desarrollará en condiciones que puedan ser degradantes o humillantes para el sentenciado. Se cumplirá en horario distinto al de las labores generadoras de los ingresos del sentenciado para su propia subsistencia y la de su familia. Se computará en jornadas de trabajo cuya extensión será determinada por el juez conforme a las

circunstancias del caso, y se cumplirá bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora.

CAPITULO V TRATAMIENTO EN LIBERTAD DE IMPUTABLES.

Artículo 21.- El tratamiento en libertad para imputables consiste en la aplicación, según las circunstancias del caso, de las medidas educativas laborales o curativas autorizadas por la ley y conducentes para que el sentenciado no vuelva a delinquir. Entre las medidas aplicables están las que resulten necesarias para la deshabitación o desintoxicación del sentenciado, cuando se trate de persona que consuma inmoderadamente bebidas alcohólicas o haga uso de estupefacientes o psicotrópicos. Se aplicará bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora.

CAPITULO VI CONFINAMIENTO

Artículo 22.- El confinamiento consiste en la obligación de residir en una circunscripción territorial y no salir de ella. El juez designará la circunscripción conciliando las exigencias de la tranquilidad pública y la seguridad del ofendido con las circunstancias del sentenciado. El confinamiento tendrá una duración de seis meses a dos años.

CAPITULO VII PROHIBICION DE CONCURRENCIA O RESIDENCIA

Artículo 23.- La prohibición de concurrencia o de residencia consiste en impedir al sentenciado asistir a determinado lugar o circunscripción territorial o residir en ellos. El juez impondrá esta prohibición tomando en cuenta las circunstancias del delito y las propias del delincuente y del ofendido. La duración de esta prohibición no podrá ser menor de seis meses ni mayor de diez años.

CAPITULO VIII MULTA

Artículo 24.- La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado que se fijará en días multa. El mínimo será de veinte y el máximo de mil. El día multa equivale a la suma total de las percepciones diarias netas del sentenciado en el momento de la consumación del delito, pero nunca podrá ser inferior al salario mínimo diario vigente en el lugar en que se cometió el delito.

Si el sentenciado omite injustificadamente el pago de la multa, en el plazo que se le haya fijado, el Estado lo exigirá mediante el procedimiento económico coactivo.

Artículo 25.- El juez, considerando las características del caso, podrá fijar plazos razonables para el pago de la multa en exhibiciones parciales.

Si el sentenciado omite injustificadamente el pago de la multa, en el plazo que se le haya fijado, el Estado lo exigirá mediante el procedimiento económico coactivo.

Artículo 26.- El importe de la multa se destinará a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al ofendido por el delito, pero si estos se han cubierto o se han garantizado, el importe se aplicará al incremento del presupuesto correspondiente a la procuración y a la administración de justicia.

CAPITULO IX REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Artículo 27.- La reparación de daños y perjuicios comprende:

I.- La restitución de la cosa obtenida mediante el delito y si no es posible, el pago del precio de la misma, a valor de reposición según el grado de uso, conservación y deterioro que corresponda;

II.- La indemnización del daño material y moral, y de los perjuicios causados. La reparación incluye el pago de la atención médica que requiera el ofendido, como consecuencia del delito.

Artículo 28.- Para determinar el alcance de los daños y perjuicios, las personas que tengan derecho al resarcimiento o deber de reparación, y las causas por las que se extingue esta obligación, se estará a lo previsto en la legislación civil del Estado. Cuando el delito hubiere sido cometido por varias personas, la obligación de reparar el daño tendrá carácter solidario entre ellas.

El Estado responde subsidiariamente con sus servidores públicos por los daños y perjuicios causados por éstos, cuando incurran en delito con motivo y en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 29.- La obligación de reparar los daños y perjuicios causados por el delito es preferente con respecto a la multa y a cualesquiera otras obligaciones asumidas con posterioridad a la comisión del delito, a excepción de las alimentarias y laborales, salvo que se demostrare que fueron contraídas para evitar el cumplimiento de aquéllas. Si no se logra hacer efectivo todo el importe de la reparación, la parte obtenida se distribuirá a prorrata entre los ofendidos.

Artículo 30.- Las garantías relacionadas con la libertad caucional, se aplicarán al pago de la reparación cuando el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Al ordenarse que se hagan efectivas esas garantías, el juez prevendrá a la autoridad ejecutora que ponga su importe a disposición del tribunal, para los efectos de este artículo.

Artículo 31.- La reparación a cargo del delincuente o de terceros obligados, se podrá exigir por el ofendido o sus derechohabientes como actores civiles principales en el procedimiento especial regulado en el Código de Procedimientos Penales. Si no lo hacen lo hará el Ministerio Público, en beneficio de aquéllos, quienes podrán coadyuvar con el Ministerio Público por sí o por medio de representantes. En estos casos, el pedimento del Ministerio Público establecerá, en sección especial, la justificación del resarcimiento y la cuantía correspondiente.

Se sancionará por incumplimiento de los deberes del cargo, al agente del Ministerio Público que no procure la satisfacción de los derechos patrimoniales del ofendido, como legalmente corresponda, cuando recaiga en aquel el ejercicio de la acción respectiva.

Si el ofendido o sus derechohabientes renuncian a la reparación, el importe de ésta se entregará al Estado y se destinará al mejoramiento de la procuración y la administración de justicia.

Artículo 32.- Atendiendo al monto de los daños y perjuicios y a la capacidad económica del obligado, el tribunal podrá fijar plazos para el pago, sin exceder de un año. Para ello podrá requerir el otorgamiento de garantía.

Artículo 33.- La reparación del daño se hará efectiva en la misma forma que la multa. Para ello, el tribunal remitirá a la autoridad ejecutora copia certificada de la sentencia correspondiente, y dicha autoridad iniciará el procedimiento económico coactivo, dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la sentencia, notificando de ello al acreedor del resarcimiento y a su representante legal.

Si no se cubre esta responsabilidad con los bienes y derechos del responsable y con el producto de su trabajo en prisión, el sentenciado seguirá sujeto a la obligación de pagar la parte que le falte. Cuando sean varios los ofendidos y no resulte posible satisfacer los derechos de todos, se cubrirán a prorrata los daños y perjuicios.

Artículo 34.- Quien se considere con derecho a la reparación de daños y perjuicios, que no pueda obtener ante la jurisdicción penal, en virtud de no ejercicio de la acción por el Ministerio Público o libertad por falta de elementos para procesar, podrá recurrir a la vía civil en los términos de la legislación correspondiente.

Quando se sobresea en el proceso penal o se dicte sentencia absolutoria, el juez penal seguirá conociendo en lo relativo a la reparación de daños y perjuicios, hasta dictar sentencia, si existe título jurídico civil que justifique el resarcimiento.

En los casos de lesiones y homicidio, la indemnización se fijará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, tomando como base la utilidad o salario que recibía la víctima; y a falta de esas pruebas, el pago se acordará tomando como base el salario mínimo general.

Si en autos no se acredita el grado de incapacidad permanente o la duración de la incapacidad temporal para trabajar, a petición del Ministerio Público o del propio ofendido se impondrán por concepto de reparación del daño, las siguientes condenas:

I.- Cuando las lesiones no pongan en peligro la vida y tarden en sanar hasta quince días, treinta días de salario;

II.- Cuando las lesiones no pongan en peligro la vida y tarden en sanar más de quince días; noventa días de salario;

III.- Cuando las lesiones pongan en peligro la vida; ciento ochenta días de salario.

Para efectos de la imposición de estas sanciones, no es necesario acreditar que el ofendido laboraba, antes de ocurrir los hechos que motivaron el juicio penal, ni que con posterioridad a éstos ya no pudo desempeñar su trabajo.

CAPITULO X DECOMISO

Artículo 35.- El decomiso consiste en la pérdida de los instrumentos, objetos o productos del delito y procederá siempre, si aquellos son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán sólo cuando el delito sea doloso y, si pertenecen a un tercero, sólo cuando éste haya tenido conocimiento de su utilización para la comisión del delito.

Las autoridades que conozcan de la averiguación previa o del proceso ordenarán el inmediato aseguramiento de los bienes que pudieran ser decomisados, y procederán en la forma dispuesta en este capítulo.

Artículo 36.- Las cosas decomisadas que puedan entrar al comercio serán subastadas y su valor se aplicará a la reparación de daños y perjuicios causados por el delito, pero si esta obligación se halla satisfecha o garantizada, se destinará al mejoramiento de la procuración y la administración de justicia, a no ser que puedan ser aplicadas directamente a este fin.

Si las cosas aseguradas o decomisadas son sustancias nocivas o peligrosas, se destruirán sin demora o se conservarán para fines de docencia o investigación, a juicio de la autoridad que las tenga a su disposición.

Los productos, rendimientos o beneficios obtenidos por los delincuentes o por otras personas como resultado de la conducta ilícita de aquéllos, serán decomisados y se destinarán al mejoramiento de la procuración y la administración de justicia.

Quando sea pertinente destruir las cosas aseguradas, en los términos de este precepto, el Ministerio Público solicitará al juez la autorización respectiva. Para ello bastará con acreditar las características de los objetos y la necesidad de destruirlos.

Artículo 37.- Los objetos o valores que no sean recogidos por quien tenga derecho a ellos, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la notificación que se le haga, se enajenarán en subasta pública y el producto de la venta se aplicará a quien esté facultado para recibirlo. Si éste no se presenta para ello, dentro de los noventa días hábiles siguientes a la notificación que se le haga, el producto de la venta se aplicará conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo anterior.

En el caso de los bienes que se hallen a disposición de la autoridad, que no se deban destruir y tampoco se puedan conservar, o sean de costoso mantenimiento, se procederá a su venta en subasta pública y el producto se dejará a disposición de quien tenga derecho a recibirlo, durante seis meses contados a partir de la notificación respectiva. En caso de que no se presente en ese tiempo, se aplicará en la forma prevista por el primer párrafo del artículo anterior.

Artículo 38.- Cuando se deba devolver un bien o entregar el producto de su venta, la autoridad deducirá los gastos ocasionados por la conservación y la venta, acreditando detalladamente su necesidad y cuantía, salvo cuando se trate de bienes de uso lícito pertenecientes a un tercero que no hubiese participado en la comisión del delito.

CAPITULO XI AMONESTACION

Artículo 39.- La amonestación consiste en el señalamiento que el juez hace al sentenciado sobre las consecuencias individuales y sociales del delito que cometió, excitándolo a la enmienda. La amonestación se hará en público o en privado, según lo considere el juez.

CAPITULO XII APERIBIMIENTO Y CAUCION DE NO DELINQUIR

Artículo 40.- El apercibimiento es la conminación que el juez hace al sentenciado para que se abstenga de cometer un nuevo delito, cuando existan elementos que permitan suponer que está en disposición de cometerlo, previéndole de las

consecuencias jurídicas que tendría su conducta delictuosa. Si existe prueba suficiente que acredite el propósito del sentenciado, el juez podrá imponerle una caución de no delinquir u otra garantía adecuada, a su juicio, y pondrá los hechos en conocimiento de la autoridad encargada de la prevención de los delitos.

El juez podrá aplicar el apercibimiento o la caución de no delinquir en cualquiera de los delitos previstos en este Código.

CAPITULO XIII SUSPENSION O PRIVACION DE DERECHOS

Artículo 41.- La suspensión de derechos consiste en la pérdida temporal del ejercicio de algún derecho. La privación de derechos consiste en la pérdida definitiva de algún derecho.

La suspensión resulta por mandato de la ley, de una pena como consecuencia necesaria de ésta, o se impone como pena en la sentencia judicial. En el primer caso la suspensión comienza y concluye con la pena de la que es consecuencia. La suspensión que se impone como pena en la sentencia corre a partir del día en que:

I.- Concluya la pena privativa de libertad, cuando se impongan ambas penas y el sentenciado haya estado recluso en la prisión, o

II.- Cause ejecutoria la sentencia, cuando dicha suspensión se imponga como pena única, o junto con una pena no privativa de la libertad o junto con una pena privativa de la libertad y ésta haya sido suspendida condicionalmente o sustituida por otra pena cualquiera.

Artículo 42.- Ninguna punibilidad suspensiva de derechos podrá ser inferior a tres meses ni superior a quince años.

Artículo 43.- Desde que cause ejecutoria la sentencia y hasta que se cumpla la condena, la pena de prisión sea o no sustituida, produce, la suspensión de los derechos políticos, y los de tutela, curatela, los de ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes.

CAPITULO XIV DESTITUCION E INHABILITACION

Artículo 44.- La destitución consiste en la privación definitiva del empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público.

La inhabilitación consiste en la privación temporal o definitiva de la capacidad, para obtener o desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público.

La inhabilitación temporal podrá durar de seis meses a diez años.

La inhabilitación y la destitución se harán efectivas a partir del día en que cause ejecutoria la sentencia. La inhabilitación correrá a partir, del día en que concluya la pena privativa de libertad cuando se imponga junto con ésta y el sentenciado haya estado recluso en la prisión o cuando cause ejecutoria la sentencia si se impone como pena única o junto con una pena no privativa de libertad o junto con una pena privativa de libertad suspendida condicionalmente o sustituida.

CAPITULO XV SUPERVISION DE LA AUTORIDAD

Artículo 45.- La supervisión de la autoridad consiste en la observación y orientación de la conducta del sentenciado, ejercidos por personal especializado, dependiente de la autoridad ejecutora con la finalidad exclusiva de que el sujeto no vuelva a delinquir. La supervisión durará el tiempo necesario para que se extinga la pena principal impuesta al sentenciado sujeto a supervisión.

El juez ordenará esta supervisión cuando en la sentencia se imponga una pena que restrinja la libertad o derechos o sustituya la privación de libertad o la multa y en los demás casos que la ley lo disponga.

CAPITULO XVI PUBLICACION DE SENTENCIA

Artículo 46.- La publicación de sentencia condenatoria consiste en la difusión de los puntos resolutive de ésta, salvo que el juez disponga un contenido mayor, en uno o mas medios de comunicación social, designados por el propio juez. La publicación se hará a costa del sentenciado, cuando esto no sea posible se hará a costa del ofendido si éste la solicita, o del Estado si el juez lo considera necesario.

Si el delito por el que se impone la publicación se cometió a través de un medio de comunicación la sentencia se publicará, además, en el mismo medio de comunicación y con las mismas características que se hayan utilizado para la comisión del delito.

CAPITULO XVII TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO O EN LIBERTAD DE INIMPUTABLES

Artículo 47.- El juez previo el procedimiento penal correspondiente, dispondrá la medida de tratamiento, en internamiento o en libertad, que la autoridad ejecutora aplicará al inimputable.

En caso de internamiento el inimputable será internado, para su tratamiento, en la institución correspondiente.

El tratamiento de inimputables consiste en la aplicación de las medidas pertinentes y autorizadas por la ley para la curación del inimputable que hubiese incurrido en una conducta prevista por la ley como delito.

Artículo 48.- El juez, o en su caso la autoridad ejecutora, podrá entregar al inimputable a sus familiares o a las personas que conforme a la ley tengan la obligación de hacerse cargo de él, siempre y cuando se obliguen a tomar las medidas adecuadas para el tratamiento y vigilancia del inimputable y se garantice a satisfacción del juez que de la autoridad ejecutora, el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Artículo 49.- La medida de tratamiento, en ningún caso, excederá, en su duración, del máximo de la punibilidad privativa de la libertad que se aplicaría por ese mismo delito, a los sujetos imputables.

Si concluido ese tiempo la autoridad ejecutora, o el responsable de la institución de internamiento bajo su cuidado lo pondrá a disposición de las autoridades de la salud, para que procedan conforme a las leyes aplicables.

CAPITULO XVIII

INTERVENCION, REMOCION, PROHIBICION DE REALIZAR DETERMINADAS OPERACIONES Y EXTINCION DE LAS PERSONAS JURIDICAS COLECTIVAS

Artículo 50.- La intervención consiste en la vigilancia de las funciones que realizan los órganos de representación de la persona jurídica colectiva con las atribuciones que la ley confiere al interventor. La intervención será por un periodo mínimo de treinta días y máximo de dos años.

Artículo 51.- La remoción consiste en la sustitución de los administradores de la persona colectiva, encargando su función a un administrador designado por el juez, durante un periodo máximo de dos años. Para hacer la designación, el juez podrá atender la propuesta que formulen los socios o asociados que no hubiesen tenido participación en el delito. Cuando concluya el periodo previsto para la administración sustituta, la designación de los nuevos administradores se hará en la forma ordinaria prevista por las normas aplicables a estos actos.

Artículo 52.- La prohibición de realizar determinadas operaciones consiste en la privación temporal del ejercicio de aquellas operaciones que hubieren tenido relación directa con el delito cometido. Estas operaciones serán especificadas, con toda precisión, en la sentencia. Si se trata de operaciones lícitas, la prohibición no excederá de dos años.

Artículo 53.- La extinción consiste en la disolución y liquidación de la persona jurídica colectiva que no podrá constituirse nuevamente por las mismas personas, sea que éstas intervengan directamente, sea que lo hagan por conducto de terceros. El juez designará a quien deba hacerse cargo de la disolución y liquidación que se llevarán adelante en la forma prevista por la legislación aplicable a estas operaciones.

Artículo 54.- Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica colectiva con excepción de las entidades del Estado, cometa un delito usando medios propios de la persona colectiva, de modo que el delito resulte cometido o nombre, bajo el amparo o en beneficio de ésta, el juez aplicará en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente y con intervención del representante legal, las punibilidades previstas en este Capítulo.

Artículo 55.- Al imponer las sanciones previstas en este artículo, el juez tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona jurídica colectiva, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona jurídica colectiva sancionada.

TITULO CUARTO APLICACION DE SANCIONES

CAPITULO I REGLAS GENERALES

Artículo 56.- El juez individualizará las penas y medidas de seguridad dentro de los límites establecidos para cada delito, con base en la magnitud de la culpabilidad del agente tomando en cuenta:

- I.- La naturaleza de la acción u omisión, y los medios empleados;
- II.- La magnitud del daño causado o no evitado;
- III.- La magnitud de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico;
- IV.- Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión de realización de la conducta y cualesquiera otras circunstancias relevantes en la realización del delito;
- V.- Los vínculos de parentesco, amistad o relación social entre el activo y el pasivo, y la calidad de las personas ofendidas;
- VI.- La edad, el nivel de educación y de cultura, las costumbres, y el sexo;
- VII.- Los motivos generosos, altruistas, fútiles, egoístas o perversos que lo impulsaron a delinquir y las específicas condiciones fisiológicas y psíquicas en que se encontraba el activo en el momento de la comisión del delito;
- VIII.- La extracción urbana o rural del agente, el desempleo, o la índole de su empleo, subempleo, y su mayor o menor marginación o incorporación al desarrollo biológico, económico, político y cultural;
- IX.- La calidad del agente como primerizo o reincidente; y
- X.- Las demás circunstancias especiales del agente que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a los requerimientos de la norma.

Para los efectos de este Código se entiende por reincidente el condenado por sentencia ejecutoriada dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero, que comete un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma un término igual a la prescripción de la pena. Cuando haya transcurrido dicho término sin que vuelva a cometer delito, se considerarán prescritos los antecedentes penales.

En caso de que el agente o el ofendido pertenezcan a un grupo étnico indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres en cuanto que sean relevantes para la individualización de la sanción.

Artículo 57.- Cuando la ley permita sustituir la pena o la medida de seguridad por otra de menor gravedad, el juez deberá aplicar esta de manera preferente; de no aplicarla deberá manifestar en la sentencia las razones que tuvo para no hacerlo.

Artículo 58.- El juez podrá prescindir de la imposición de alguna o algunas de las penas o medidas de seguridad previstas en este Código, de manera total o parcial, si la imposición resulta notoriamente innecesaria e irracional en los casos siguientes:

I.- Cuando con motivo del delito cometido el agente hubiese sufrido consecuencias graves en su persona.

II.- Cuando el agente presente senilidad o padezca enfermedad grave e incurable avanzada.

En estos casos, el juez tomará en cuenta el resultado de los dictámenes médicos y manifestará con toda precisión, en la sentencia, las razones de su determinación.

Artículo 59.- Cuando este Código disponga la disminución o el aumento de una sanción en proporción a otra, se entenderá que dicho aumento o, disminución operará en relación a los mínimos y máximos de la sanción legal que sirva de referencia, sin rebasar los máximos previstos en este Código.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable a la reparación de daños y perjuicios.

Artículo 60.- El juez determinará el momento a partir del cual debe correr la sanción accesoria. Para ello, indicará en la sentencia si ésta correrá al mismo tiempo que la principal y se extinguirán simultáneamente; comenzará conjuntamente con ella y la excederá durante determinado tiempo; o comenzará cuando concluya la principal.

CAPITULO II DELITOS CULPOSOS

Artículo 61.- Solamente se sancionan como delitos culposos los siguientes:

Homicidio simple (Art. 110), homicidio en razón del parentesco o relación (Art. 111), homicidio en riña (Art. 114), lesiones (Arts. 116, 117 y 118), lesiones por contagio (Art. 120), lesiones en riña (Art. 121), aborto sufrido sin violencia (Art. 131), omisión de cuidado (Art. 139), violación impropia (Art. 150), allanamiento de morada (Art. 162), revelación de secreto (Art. 164), abigeato (Arts. 181, 182, 183, 184 y 185), daños (Art. 200), ejercicio indebido del servicio público (Art. 235 fracciones I y II), evasión de presos (Art. 274), incumplimiento de los deberes de abogados, defensores o litigantes (Art. 281 fracción III), interrupción o dificultamiento del servicio público de comunicación (Arts. 308 fracción I, art. 309 y 310), violación de correspondencia (Art. 315), enajenación fraudulenta de medicinas nocivas o inapropiadas (Art. 344).

Artículo 62.- Los delitos culposos se sancionarán con una punibilidad cuyo mínimo será siempre el que como tal se prevé en el respectivo capítulo del Título Tercero de este Libro Primero, y un máximo equivalente al mínimo de la sanción asignada para el correspondiente delito doloso. Igualmente se impondrá, en su caso, suspensión hasta de cinco años o privación definitiva de autorización, licencia o permiso, o de los derechos, para ejercer profesión, oficio, cargo o función, correspondientes a la actividad en cuyo ejercicio cometió el delito.

Artículo 63.- Al imponer la sanción correspondiente al delito culposo, el juez, además de tomar en cuenta las reglas generales de individualización previstas en el artículo 56, deberá valorar las siguientes circunstancias:

- I.- La mayor o menor posibilidad de prever y de evitar el daño que resultó;
- II.- Si el inculpaado ha delinquir anteriormente en circunstancias semejantes;
- III.- Si tuvo tiempo para desplegar el cuidado posible y adecuado para no producir o evitar el daño que se produjo;
- IV.- El estado y funcionamiento mecánico del objeto que manipulaba el agente;
- V.- El estado del medio ambiente en el que actuaba, y
- VI.- Cualesquiera otras circunstancias relevantes.

CAPITULO III IMPUTABILIDAD DISMINUIDA

Artículo 64.- Para el caso de que el agente, al cometer el delito se hallare en el supuesto del artículo 15, se le impondrán hasta las dos terceras partes de la sanción aplicable para el delito cometido.

CAPITULO IV ERROR VENCIBLE Y EXCESO

Artículo 65.- En caso de que el error a que se refiere el inciso a) de la fracción X del artículo 14, sea vencible, se impondrá la punibilidad prevista para el delito culposo, siempre y cuando el correspondiente delito se encuentre previsto en el artículo 61.

Artículo 66.- Al que por error vencible, actúe bajo la creencia errónea de que su conducta se encuentra amparada por alguna de las excluyentes de incriminación previstas en las fracciones IV a VIII y XI del artículo 14, se le aplicará la tercera parte de la sanción que corresponda al delito que se trate.

La misma sanción se impondrá a quien por error vencible se exceda en alguna de las excluyentes de incriminación previstas en las fracciones IV a VII del artículo 14.

CAPITULO V TENTATIVA

Artículo 67.- La punibilidad aplicable a la tentativa, salvo disposición en contrario, será de las dos terceras partes de la prevista para el correspondiente delito doloso consumado. Para imponer la sanción el juez deberá valorar el grado a que se llegó en la ejecución del delito y la magnitud del peligro producido o no evitado al bien protegido en el tipo.

En el caso de que no fuere posible determinar el daño que se pretendió causar, cuando éste fuera determinante para la correcta adecuación típica, se impondrá la mitad de la sanción señalada en el primer párrafo de este artículo.

CAPITULO VI

Artículo 68.- En caso de concurso real se impondrá la sanción correspondiente al delito que merezca la mayor, aumentándola con la suma de las sanciones correspondientes a cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de cincuenta años de prisión.

En caso de concurso ideal, se impondrá la sanción correspondiente al delito que merezca la mayor, aumentándola hasta en una mitad del máximo de su duración, sin que exceda de cincuenta años de prisión.

En ambos casos el juez señalará, en la sentencia, la sanción correspondiente a cada uno de los delitos por los que se condena al agente.

Artículo 69.- Si el delito es continuado, la sanción se aumentará en una mitad más de la prevista en la ley para el delito cometido.

CAPITULO VII AUTORIA INDETERMINADA.

Artículo 70.- Cuando varios sujetos intervengan en la comisión del delito y no conste quién de ellos produjo el resultado, a todos se les aplicará las dos terceras partes de la punibilidad correspondiente.

Artículo 71.- Cuando se cometa algún delito por pandilla la punibilidad se incrementará de tres meses a tres años. Se entiende que hay pandilla cuando en la realización de un delito participen, en común, tres o más personas, sin que estén organizadas con fines delictivos.

CAPITULO IX SUSTITUCION

Artículo 72.- La prisión podrá ser sustituida, a juicio del tribunal. Para ello considerará lo dispuesto en el artículo 56 y detallará en la sentencia la apreciación que corresponda sobre cada uno de los elementos previstos en dicho precepto para fines de individualización.

Artículo 73.- La sustitución de la sanción privativa de libertad se hará en los siguientes términos:

I.- Por multa o suspensión condicional de la ejecución de la condena, si la sanción privativa de la libertad no excede de un año seis meses, tratándose de delito doloso, o de dos años seis meses, si se trata de delito culposo. La multa sustitutiva es independiente de la señalada, en su caso, como sanción directamente aplicable por el delito cometido;

II.- Por semilibertad, si la prisión es superior a la mencionada en la fracción precedente, pero no excede de dos años seis meses, tratándose de delito doloso, o de tres años seis meses, si se trata de delito culposo. La duración de la semilibertad no podrá exceder de la correspondiente a la prisión sustituida; y

III.- Por tratamiento en libertad o trabajo en favor de la comunidad, si la prisión es mayor que la prevista en la fracción anterior, pero no excede de tres años, tratándose de delito doloso, o de cuatro, si se trata de delito culposo. El tratamiento no podrá exceder de la duración prevista para la pena privativa de libertad. Cada jornada de trabajo en favor de la comunidad sustituirá a un día de prisión.

El juez manifestará las razones que tenga para imponer la sanción sustitutiva en el caso concreto.

Artículo 74.- El juez resolverá, según las circunstancias del caso, sobre la suspensión, sustitución o ejecución de las demás sanciones impuestas.

Artículo 75.- Asimismo, se suspenderá la ejecución de la condena por delitos perseguibles de oficio o mediante querrela, en los siguientes casos:

I.- Cuando se haya dispuesto multa o semilibertad, como pena directa o como sustitutivo de la prisión, y sobrevenga la reconciliación entre el inculpaado y el ofendido, espontáneamente o propiciada por la autoridad ejecutora, en forma tal que manifieste la readaptación social del sentenciado; y

II.- Cuando se haya dispuesto prisión, y sobrevenga la reconciliación entre el inculpaado y el ofendido, espontáneamente o propiciada por la autoridad ejecutora, en forma tal que manifieste la readaptación social del sentenciado, o cuando se otorgue garantía de pago de los daños y perjuicios causados, a satisfacción del ofendido.

Artículo 76.- Para que proceda la sustitución de la sanción privativa de libertad, es necesario que se observen las siguientes condiciones:

I.- Que se acredite la conveniencia de la sustitución, tomando en cuenta los requerimientos de la justicia y las necesidades de la readaptación social en el caso concreto;

II.- Que sea la primera vez que delinque el sujeto y haya observado buena conducta positiva antes y después de la comisión del delito.

III.- Que se reparen los daños y perjuicios causados al ofendido o a sus derechohabientes, o se de garantía suficiente de repararlos. Esta garantía, patrimonial o de otra naturaleza, será valorada por el juzgador en forma que se asegure razonablemente la satisfacción del ofendido y el acceso del infractor a la sustitución o suspensión;

IV.- Que el sentenciado desarrolle una ocupación lícita, tenga domicilio cierto, observe buena conducta positiva y comparezca periódicamente ante la autoridad hasta la extinción de la sanción impuesta. El juez fijará los plazos y las condiciones para el cumplimiento de estos deberes, atendiendo a las circunstancias del caso. El sentenciado deberá informar al juez y a la autoridad ejecutora acerca de sus cambios de domicilios y trabajos y recibir de aquél la autorización correspondiente;

V.- Que el sentenciado no abuse de bebidas embriagantes ni haga uso de estupefacientes o psicotrópicos, salvo que ésto ocurra por prescripción médica; y

VI.- Que aquél se abstenga de causar molestias al ofendido, a sus familiares y allegados, y a cualesquiera personas relacionadas con el delito o el proceso.

Antes de resolver la sustitución, el juez requerirá al sentenciado para que, una vez enterado de estas condiciones, asuma el expreso y formal compromiso de cumplirlas.

Artículo 77.- En el caso de suspensión condicional de la ejecución de la condena, la sanción se extinguirá cuando transcurra el tiempo fijado a la sanción suspendida sin que el beneficiario cometa algún delito o incumpla las condiciones de la suspensión. Si incurre en delito culposo o deja de cumplir dichas condiciones, el juez resolverá si se revoca la suspensión y ejecuta la sanción suspendida, o se apercibe al reo y se le dispensa, por una sola vez, de la falta cometida. Si incurre en delito doloso, se revocará la suspensión y se ejecutará la sanción impuesta. Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el plazo de suspensión, hasta que se dicte sentencia firme.

En lo que respecta a la extinción y a la revocación de la sanción sustitutiva, con ejecución de la sustituida, se estará a la duración dispuesta para aquélla, así como a lo previsto en el párrafo anterior.

En todo caso se computará en favor del sentenciado el tiempo que permaneció bajo suspensión o sustitución, cumpliendo las condiciones inherentes a éstas, hasta el momento en que se produjo la causa de revocación. Asimismo, se abonará el tiempo en que hubiese cumplido la sanción suspendida o sustituida.

Artículo 78.- La multa impuesta directamente o como sanción sustitutiva, podrá ser sustituida, total o parcialmente, por trabajo en favor de la comunidad, cuando se acredite que el sentenciado no puede pagarla o sólo esté en condiciones de cubrir parte de ella.

En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de ésta la parte proporcional a las jornadas de trabajo prestado en favor de la comunidad, o al tiempo que el reo hubiese cumplido en prisión, tratándose de la multa sustitutiva de la pena privativa de libertad. En este caso la equivalencia será a razón de un día multa por un día de prisión.

Cuando se hubiese hecho condena a reparación de daños y perjuicios, además de la multa, la sustitución quedará condicionada al cumplimiento de la condición fijada en la fracción III del artículo 76.

Artículo 79.- Cuando el inculpado o un tercero hubiesen otorgado garantía patrimonial para el cumplimiento de los deberes inherentes a la suspensión o sustitución, la obligación de aquéllos concluirá al extinguirse la sanción impuesta. Si el inculpado solicita que se le releve de la garantía otorgada sin ofrecer otra, la revoca o cancela, o incumple las condiciones o deberes inherentes a ésta, se estará a lo dispuesto en el artículo 77.

Artículo 80.- Cuando el tercero tenga motivos fundados para cesar en su condición de garante, he expone al juez a fin de que éste, si los estima justificados, prevenga al sentenciado que constituya nueva garantía dentro del plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que si no lo hace, se ejecutará la sanción suspendida o sustituida.

Artículo 81.- El sentenciado deberá informar al juez sobre la muerte o insolvencia del tercero, así como acerca de cualquiera otra circunstancia de la que tenga conocimiento y que afecte la garantía otorgada por aquél, para el efecto de que se constituya nueva garantía o se ejecute la sanción, tomando en cuenta, en lo conducente, lo establecido en el artículo 77.

Artículo 82.- El Ejecutivo podrá conmutar la sanción impuesta en sentencia irrevocable, cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 355, 364 y 365 en los siguientes términos:

I.- La prisión, por confinamiento, a razón de un día de aquélla por uno de éste; y

II.- El confinamiento, por multa, a razón de un día de aquél por dos días de ésta.

TITULO QUINTO EXTINCION DE LA POTESTAD PUNITIVA

CAPITULO I REGLAS GENERALES

Artículo 83.- La potestad punitiva se extingue por cualquiera de las siguientes causas, aplicables a imputables e inimputables, en sus respectivos casos, conforme a lo previsto en el presente Código:

I.- Reconocimiento de inocencia;

II.- Cumplimiento de la pena o de la medida de seguridad;

III.- Sentencia o procedimiento penal anterior;

IV.- Ley más favorable;

V.- Muerte del responsable;

VI.- Amnistía;

VII.- Perdón;

VIII.- Indulto;

IX.- Cancelación del tratamiento de inimputables.

X.- Prescripción.

Artículo 84.- Las resoluciones sobre las causas extintivas se dictarán de oficio o a solicitud de parte, por el Ministerio Público, la autoridad judicial o la autoridad ejecutora, según aparezca dicha causa en la averiguación previa, el proceso o el período de ejecución, respectivamente, sin perjuicio de lo dispuesto por este Código y por el de Procedimientos Penales acerca del reconocimiento de la inocencia del condenado.

Si en la ejecución se advierte que hubo causa extintiva durante la averiguación previa o el proceso, sin que se haya hecho valer en esas etapas, se solicitará la libertad absoluta del reo al órgano jurisdiccional que hubiese conocido del asunto.

Artículo 85.- La extinción que se produzca en los términos de este Título no abarca el decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito, ni afecta la reparación de daños y perjuicios, salvo cuando la extinción de ésta sea consecuencia necesaria de la causa extintiva correspondiente. En este caso, si el inculpado o sentenciado cubrió la reparación de daños y perjuicios, podrá repetir por enriquecimiento indebido, en los términos de la legislación civil.

CAPITULO II RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA

Artículo 86.- Se anulará la sanción impuesta cuando se reconozca la inocencia del condenado. Procede este reconocimiento:

I.- Cuando la sentencia se funde exclusivamente en pruebas que se declaren falsas con posterioridad a la emisión de aquélla;

II.- Cuando después de dictada la sentencia aparezcan documentos públicos que invaliden las pruebas en que se haya fundado aquélla; o

III.- Cuando después de dictada la sentencia se demuestre por prueba indubitable que no hubo delito o que el sentenciado no tuvo participación alguna en los hechos.

Artículo 87.- Si el condenado ha cumplido la sanción impuesta y se encuentra en la situación que prescribe el artículo anterior, tiene derecho a que se le reconozca su inocencia. Si ya ha fallecido, la facultad de solicitar el reconocimiento de inocencia corresponde a sus derechohabientes.

Artículo 88.- La resolución que declare la inocencia se publicará, a título de reparación y a petición del interesado, a costa del Estado, en dos diarios de mayor circulación en el lugar de residencia del beneficiario, así como en el órgano oficial del gobierno.

Artículo 89.- El Ejecutivo del Estado dispondrá, administrativamente, en los supuestos del artículo 86 la forma en que deba repararse el daño causado a quien permaneció privado de su libertad y fue declarado inocente. La reparación se hará a razón de dos días de salario mínimo por cada día de privación de la libertad, por lo menos.

CAPITULO III

CUMPLIMIENTO DE LA PENA O
MEDIDA DE SEGURIDAD

Artículo 90.- Las penas y medidas de seguridad se extinguen, con todos sus efectos, en el momento en que se agota su cumplimiento o el de las sanciones por las que hayan sido sustituidas o conmutadas. Asimismo se extinguen por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión de la ejecución de la sentencia y de los deberes dispuestos para la libertad preparatoria y la remisión, así como la rehabilitación concedida.

CAPITULO IV
SENTENCIA O PROCEDIMIENTO PENAL ANTERIOR

Artículo 91.- Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.

Cuando existan en contra de la misma persona y por la misma conducta:

- I.- Dos procedimientos distintos, se archivará o sobreseerá de oficio el segundo;
- II.- Una sentencia y un procedimiento distinto, se archivará o se sobreseerá de oficio el procedimiento distinto, o
- III.- Dos sentencias dictadas en procesos distintos, se extinguirán los efectos de la que no haya causado ejecutoria o de la segunda si ninguna ha causado ejecutoria.

CAPITULO V
LEY MAS FAVORABLE

Artículo 92.- Cuando una ley suprima un tipo penal, se extinguirá la potestad punitiva correspondiente y se pondrá en absoluta e inmediata libertad al inculcado o al sentenciado y cesarán de derecho todos los efectos del procedimiento penal o de la condena. El Ministerio Público, el juez, o en su caso el órgano ejecutor, aplicará de oficio la nueva ley más favorable.

CAPITULO VI

Artículo 93.- La muerte del sujeto activo extingue la potestad punitiva.

CAPITULO VII
AMNISTIA

Artículo 94.- La amnistía extingue la potestad punitiva, en los términos de la ley que la conceda. Si la ley no expresa el alcance de la amnistía, se entenderá que la potestad punitiva se extingue con todos sus efectos salvo lo dispuesto en el artículo 85 y para todos los responsables.

CAPITULO VIII
PERDON

Artículo 95.- El perdón que sólo puede ser otorgado por el ofendido o legitimado para otorgarlo, extingue la potestad punitiva, cuando se trate de delitos perseguibles mediante querrela u otro requisito de procedibilidad equivalente. El perdón debe ser otorgado expresamente, es irrevocable, y puede ser concedido en cualquier tiempo, hasta el cumplimiento de la sanción, siempre que el acusado no se oponga a su otorgamiento.

El perdón sólo surte efectos en relación a quien lo otorga y beneficia al acusado al que se le concede, salvo cuando el ofendido o el legitimado para otorgarlo haya obtenido la plena satisfacción de sus intereses o derechos, el perdón beneficiará a todos los acusados.

Se aplicarán las disposiciones contenidas en los párrafos anteriores cuando la persecución del delito esté sujeta a un requisito de procedibilidad equivalente a la querrela, que deba ser satisfecho por alguna autoridad, y ésta manifieste que no solicita dicha persecución o que se desiste de la que hubiese promovido.

CAPITULO IX
INDULTO

Artículo 96.- El Ejecutivo podrá conceder el indulto a los sentenciados por delitos contra la seguridad interior del Estado a excepción de los previstos en los artículos 362 y 363. En los demás delitos, podrá concederlo sólo cuando el sentenciado haya prestado importantes servicios a la Nación o al Estado de Tabasco y existan datos que revelen efectiva readaptación social.

CAPITULO X
CANCELACION DEL TRATAMIENTO
DE INIMPUTABLES

Artículo 97.- El tratamiento en internamiento o en libertad impuesto a un inimputable se extinguirá en caso de que se acredite que ya no requiere dicho tratamiento. Asimismo se extinguirá, cuando el inimputable sujeto a tratamiento por sentencia judicial, habiendo estado prófugo sea detenido y se acredite que sus condiciones personales han cambiado en forma tal que ya no es necesaria la ejecución del tratamiento.

CAPITULO XI
PRESCRIPCION

Artículo 98.- La prescripción extingue la potestad punitiva, opera por el simple transcurso del tiempo, es personal y se declara de oficio o a petición de parte.

Artículo 99.- Los plazos para la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio del Estado, si por esta circunstancia no es posible concluir la averiguación, o el proceso o ejecutar la sentencia.

Artículo 100.- Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos y se contarán a partir de que:

- I.- Se consumó el delito, si éste es instantáneo;
- II.- Se realizó la última conducta, si el delito es continuado;
- IV.- Se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se trata de tentativa.

Artículo 101.- En los casos de concurso real o ideal, los plazos para la prescripción se computarán separadamente para cada delito, pero correrán en forma simultánea.

Artículo 102.- La pretensión punitiva tanto de delitos que se persigan de oficio como por querrela del ofendido o por algún otro acto equivalente, prescribirá:

- I.- En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las agravantes o atenuantes típicas aplicables al delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años ni mayor de quince. La misma regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma conjuntiva o alternativa con otra diversa.
- II.- En un año si el delito se sanciona exclusivamente con multa, o está dispuesta en forma conjuntiva o alternativa con otra sanción no privativa de la libertad.
- III.- En dos años en todos los demás casos.

La prescripción de la reparación de daños y perjuicios derivada de un delito, correrá a partir de la prescripción de la pretensión punitiva y se sujetará a los plazos antes decritos.

Artículo 103.- Cuando para la persecución del delito sea necesario que se dicte sentencia en juicio diverso, el plazo no correrá sino hasta que exista dicha sentencia ejecutoriada.

En caso de que para la persecución del delito se requiera otra declaración o resolución de autoridad, el plazo para la prescripción empezará a correr cuando se dicten la declaración o resolución irrevocables. Cuando iniciados los trámites ante la autoridad correspondiente, transcurran tres años sin que se haya dictado la declaración o resolución, el plazo de prescripción comenzará a correr aunque no se hayan dictado aquéllas.

Si lo que se requiere para ejecutar la acción penal es la remoción de inmunidad de un servidor público, la prescripción correrá desde que se produzca ese acto o a partir del momento en que concluya la inmunidad por cualquier otra causa, todo ello sin perjuicio de que el procedimiento continúe por lo que respecta a otros inculcados que no gocen de inmunidad.

Artículo 104.- Las actuaciones de la autoridad competente, directamente encaminadas a la investigación del delito o de su autor, aunque por ignorarse quien sea éste, las diligencias no se practiquen contra persona determinada, interrumpen el curso de la prescripción. Si se deja de actuar, comenzará a correr el plazo, desde el día posterior al de la última actuación realizada.

Tienen el mismo efecto señalado en el párrafo anterior las actuaciones realizadas por la autoridad a la que se solicita la entrega del presunto delincuente o la realización de alguna diligencia. En estos casos la interrupción subsistirá basta que la autoridad requerida niegue la entrega o hasta que desaparezca la situación legal que motivó el aplazamiento de aquélla.

Las actuaciones mencionadas en los párrafos anteriores de este artículo, no interrumpirán el curso de la prescripción cuando se practiquen durante la segunda mitad del plazo necesario para que opere aquélla.

Artículo 105.- La interrupción de la prescripción de la pretensión punitiva, sólo podrá ampliarse hasta una mitad más los plazos de prescripción señalados en el artículo 102.

Artículo 106.- Los plazos para la prescripción de la potestad de ejecutar la sanción serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquél en que el condenado se sustraiga a la acción de la justicia, si las sanciones son privativas o restrictivas de la libertad. En los demás casos correrán desde la fecha en que cause ejecutoria la sentencia.

Artículo 107.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la pena privativa de libertad, prescribirá en un plazo igual al fijado en la condena, pero nunca será inferior a tres años ni excederá de quince.

Si se ha cumplido parte de la sanción, sólo se necesitará un tiempo igual al que falte para el total cumplimiento de la condena, tomando en cuenta, asimismo, los límites dispuestos en el párrafo precedente.

Artículo 108.- La pena de multa sola o impuesta en forma conjuntiva o alternativa con otra sanción no privativa de libertad prescribirá en un año, las demás sanciones que tengan prevista determinada duración, prescribirán en un plazo igual al de su duración, pero no podrá ser menor de dos años ni mayor de ocho. Si se trata de sanciones que no tengan temporalidad, la prescripción ocurrirá en tres años.

La reparación de daños y perjuicios derivada de un delito, prescribirá en diez años y no correrá el plazo mientras el responsable esté privado de su libertad.

Artículo 109.- La prescripción de la pena privativa de la libertad sólo se interrumpe con la aprehensión del reo aunque la aprehensión se ejecute por delito diverso. La prescripción de las demás sanciones se interrumpirán por las actuaciones de la autoridad competente encaminadas directamente a hacer efectivas las sanciones, y comenzará a correr de nuevo al día siguiente de aquél en que se realice la última actuación.

LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL

SECCION PRIMERA DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

TITULO PRIMERO. DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL

CAPITULO I HOMICIDIO

Artículo 110.- Al que prive de la vida a otro, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.

Artículo 111.- Al que prive de la vida al ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, quebrantando la fe o la seguridad que el pasivo debía esperar del activo por la real y actual relación de confianza que existe entre ambos en el caso concreto, se le impondrá prisión de veinte a cincuenta años; así como pérdida de los derechos que tenga con respecto al ofendido, inclusive los de carácter sucesorio.

Artículo 112.- A quien cometa un homicidio calificado se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión.

Artículo 113.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anterior al que incurra en homicidio doloso al cometer un robo o una violación, si el homicidio recae sobre el sujeto pasivo de estos delitos. La misma pena se aplicará a quien cometa el homicidio en cualquier lugar de acceso reservado, si el agente penetró en él mediante engaño o sin el consentimiento de la persona autorizada para darlo.

Artículo 114.- A quien cometa homicidio en riña se le impondrá prisión de cinco a doce años, si se trata del provocador, y de tres a siete si se trata del provocado.

Artículo 115.- Al que prive de la vida a otro, por petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste, siempre que medien razones humanitarias o de salud comprobadas se le aplicará prisión de cuatro a doce años.

CAPITULO II LESIONES

Artículo 116.- Al que cause a otro un daño en su salud se le impondrán:

I.- De cuarenta y cinco a noventa días de trabajo en favor de la comunidad cuando las lesiones tarden en sanar hasta quince días;

II.- De seis meses a dos años de prisión, cuando las lesiones tarden en sanar más de quince días y menos de sesenta;

III.- De dos a tres años de prisión, cuando las lesiones tarden en sanar más de sesenta días;

IV.- De tres a cinco años de prisión, cuando las lesiones dejen cicatriz permanentemente notable en la cara;

V.- De tres a seis años de prisión, cuando las lesiones disminuyan facultades o el normal funcionamiento de órganos o miembros;

VI.- De cinco a diez años de prisión, cuando las lesiones produzcan la pérdida de cualquier función orgánica, o de un miembro, o de un órgano, o de una facultad, o causen una enfermedad incurable, o una deformidad incorregible;

VII.- De tres a seis años de prisión, cuando pongan en peligro la vida, sin perjuicio de las penas que deban aplicarse conforme a las fracciones IV a VI.

Artículo 117.- Cuando las lesiones causen incapacidad de treinta días a un año para trabajar en el oficio, arte o profesión del ofendido, la pena se agravará con prisión de seis meses a tres años. Si la incapacidad para trabajar es de más de un año, la pena se agravará con prisión de tres a cinco años.

Artículo 118.- Se impondrá una mitad más de la sanción correspondiente a las lesiones inferidas, a quien las cause en los casos y en la forma prevista en el artículo 111. Además se le privará de los derechos que tenga con respecto al ofendido, inclusive los de carácter sucesorio.

Artículo 119.- Cuando las lesiones se infieran en agravio de un menor o de un incapaz sujeto a la patria potestad, tutela o custodia del agente, la pena se agravará:

I.- Con prisión de tres a seis meses si se trata de las previstas en la fracción I del artículo 116 y se infieren con crueldad o frecuencia.

II.- Con prisión de seis meses a dos años si son de las previstas en las fracciones II a VII del artículo 116.

En ambos casos se decretará la suspensión de los derechos que tenga el agente en relación con el sujeto pasivo.

Artículo 120.- Al que padeciendo una enfermedad grave y transmisible, realice actos mediante los cuales contagie a una persona, se le aplicará la pena que corresponda conforme a los artículos 116 y 117.

Artículo 121.- Al responsable de lesiones calificadas se le agravará la pena en una mitad más.

Artículo 122.- Al que infiera lesiones en riña se le impondrá hasta la mitad de las penas correspondientes si se trata del provocador, y la tercera parte si se trata del provocado.

**CAPITULO III
DISPOSICIONES COMUNES PARA
EL HOMICIDIO Y LAS LESIONES.**

Artículo 123.- El homicidio y las lesiones son calificadas cuando:

I.- El pasivo no tiene ocasión de defenderse ni de evitar el mal que se le quiera hacer.

II.- El activo quebrante la fe o seguridad que expresamente había prometido al pasivo, o la tácita que éste debía esperar de aquél por la relación que fundadamente inspira confianza;

III.- El agente actúe por retribución dada o prometida;

IV.- El agente actúe con ensañamiento o crueldad o por motivos depravados, o

V.- Se realice el hecho por inundación, incendio, o asfixia; minas, bombas o explosivos; radiación o liberación masiva de gas, o veneno o cualquier otra sustancia nociva a la salud.

Artículo 124.- Riña es la contienda de obra entre dos o más personas con el propósito de dañarse reciprocamente.

Artículo 125.- Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo del tránsito de vehículos del servicio público, escolar o de personal la sanción se agravará en una mitad más de la prevista para el delito culposo, y se aplicará al responsable suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito.

Las mismas sanciones se impondrán si el agente actúa en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, sin que exista prescripción médica, o no auxilie a la víctima del delito y se de a la fuga injustificadamente.

Cuando por culpa grave se cause homicidio de dos o más personas, en las circunstancias previstas en el primer párrafo de este precepto, las penas serán de seis a veinte años de prisión y destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros, de la misma naturaleza

Artículo 126.- Se aplicarán la mitad de la sanción prevista para el homicidio o las lesiones culposos que se cometan sobre su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario.

Si el autor se encuentra bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos sin que medie prescripción médica, o no auxilie a la víctima se impondrán las sanciones generalmente aplicables a las lesiones o el homicidio culposos.

Artículo 127.- Cuando el agente cometa homicidio o lesiones en estado de emoción violenta, las penas correspondientes se reducirán en una mitad. Existe emoción violenta cuando en virtud de las circunstancias en que ocurre el delito y de las propias del agente o del pasivo o de ambos, se halle considerablemente reducida la culpabilidad del agente, sin que exista inimputabilidad plena o imputabilidad disminuida.

Artículo 128.- Si el juzgador lo estima pertinente, podrá imponer al responsable de homicidio o lesiones, además de las penas previstas, supervisión de la autoridad y prohibición de concurrencia o residencia.

**CAPITULO IV
INDUCCION Y AUXILIO AL SUICIDIO**

Artículo 129.- Al que induzca a otro a suicidarse, se le impondrá prisión de cuatro a nueve años si el suicidio se consuma. Si la persona instigada es menor de edad o es inimputable, la prisión será de seis a quince años.

Al que ayude al suicidio a una persona que quiere suicidarse, se le aplicará prisión de dos a cinco años si el suicidio se consuma. Si la persona que quiere suicidarse es menor de edad o no tiene capacidad de comprender la relevancia de su conducta o de determinarse conforme a esa comprensión, la prisión será de cuatro a diez años.

Si el suicidio no se consuma por causas ajenas a la voluntad del inductor o del que presta ayuda, se aplicará a éstos la pena correspondiente a la tentativa.

**CAPITULO V
ABORTO**

Artículo 130.- Aborto es la muerte del producto de la concepción causada por actos ejecutados en cualquier momento del embarazo

Artículo 131.- Se aplicará prisión de tres a seis años al que haga abortar a una mujer sin el consentimiento de ésta. Si se emplea violencia física o moral, la prisión será de seis a ocho años.

Artículo 132.- Se aplicará prisión de uno a tres años al que haga abortar a una mujer con el consentimiento de ésta. La misma pena se impondrá a la mujer que consienta en que otro la haga abortar

Artículo 133.- Se aplicará prisión de seis meses a tres años a la mujer que procure a sí misma el aborto.

Artículo 134.- Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrona o partero se le aplicará, además de las penas que le correspondan, conforme a los artículos anteriores, suspensión de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión u oficio.

Artículos 135.- El delito de aborto solamente se sancionará cuando se haya consumado.

Artículo 136.- No es punible el aborto:

I.- Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida. En estos casos, no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, bastará la comprobación de los hechos; o

II.- Cuando de no practicarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

**TITULO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PERSONAL**

**CAPITULO I
OMISION DE AUXILIO**

Artículo 137.- Al que estando en presencia de una persona desamparada y en peligro manifiesto y actual para su vida o salud, omita prestarle el auxilio posible o, no dé aviso inmediato a la institución o autoridad, o no solicite el auxilio a quienes puedan prestarlo, se le aplicarán de seis a dieciocho meses de trabajo en favor de la comunidad.

Artículo 138.- Se le impondrá la misma sanción del artículo anterior al que habiendo atropellado a una persona, omita prestarle el auxilio posible o, si no pudiera hacerlo personalmente, no lo solicite y permanezca en el lugar hasta que el auxilio sea prestado.

**CAPITULO II
OMISION DE CUIDADO**

Artículo 139.- Al que abandone a una persona incapaz de valerse a sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le aplicará prisión de uno a cuatro años.

**TITULO TERCERO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL**

**CAPITULO I
PRIVACION DE LA LIBERTAD**

Artículo 140.- Al que prive de su libertad a una persona, se le aplicará prisión de seis meses a tres años y de cincuenta a cien días multa.

Artículo 141.- La pena prevista en el artículo anterior se aumentará en una mitad más, cuando la privación de la libertad:

I.- Se realice con violencia o se vea al ofendido

II.- Se lleve a cabo en persona menor de dieciséis años de edad o mayor de sesenta o cuando por cualquier circunstancia esté en imposibilidad de resistir o en situación de inferioridad física respecto del agente;

III.- Se prolongue por más de ocho días;

IV.- Se realice por quien se ostente como autoridad, sin serlo, o

V.- Se realice por algún servidor público.

Artículo 142.- Si el agente espontáneamente libera a la víctima dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin que medie violencia y sin causar daño, la pena de prisión se disminuirá en una mitad.

CAPITULO II SECUESTRO

Artículo 143.- Se aplicará prisión de diez a cuarenta años y de cien a quinientos días multa, a quien prive de la libertad a una persona con el propósito de:

I.- Obtener un rescate, un derecho o el cumplimiento de cualquier condición;

II.- Que la autoridad realice o deje de realizar un acto de cualquier índole, o

III.- Causar daño o perjuicio al secuestrado o a otra persona.

Artículo 144.- Se impondrá prisión de veinte a cuarenta años y de doscientos a setecientos días multa cuando en el secuestro concorra alguna de las circunstancias siguientes:

I.- Se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario.

II.- Se ejecute por quien haya sido integrante de una institución de seguridad pública, o se ostente como tal sin serlo;

III.- Se lleve a cabo por dos o más personas;

IV.- Se ejecute con violencia, o se le somera con vejaciones, o

V.- Que la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier circunstancia no esté en posibilidad de resistir o en situación de inferioridad física respecto del agente

Artículo 145.- Si el agente, espontáneamente libera al secuestrado dentro de los tres días siguientes al de la privación de libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 143, y sin que se presente alguna de las circunstancias previstas en el artículo 144, la prisión será de seis meses a tres años y de cincuenta a cien días multa.

CAPITULO III RAPTO

Artículo 146.- Al que sustraiga o retenga a una persona por medio de la violencia física o moral o mediante engaño para realizar algún acto sexual o para casarse, se le aplicará prisión de uno a cinco años.

Artículo 147.- La misma pena se aplicará al que, para realizar algún acto sexual o para casarse, sustraiga o retenga a una persona menor de doce años o que no tenga capacidad de comprender el hecho o que por cualquier causa no pueda resistir.

TITULO CUARTO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL.

CAPITULO I VIOLACION

Artículo 148.- Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce años.

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.

Artículo 149.- Se sancionará con prisión de seis a doce años, al que introduzca por vía vaginal o anal cualquiera elemento, o instrumento, o cualquiera parte del cuerpo humano, distinta del miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.

Artículo 150.- Al que tenga cópula con persona de cualquier sexo, menor de doce años o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistir, se le aplicará prisión de ocho a catorce años.

Artículo 151.- Cuando la violación se cometa por dos o más personas, o el sujeto activo tenga con el ofendido una relación de autoridad de hecho o de derecho, se impondrá prisión de ocho a veinte años.

Además de las sanciones previstas, en el segundo supuesto de este artículo, el juez privará al agente del ejercicio de la patria potestad, la tutela o la custodia y, en su caso, de los derechos sucesorios con respecto del ofendido.

Artículo 152.- Cuando la violación se comete aprovechando los medios o circunstancias del empleo, cargo o profesión que se ejerce, se aplicará la misma pena prevista en el artículo anterior y se le privará al agente del empleo, cargo o profesión y se le inhabilitará para ejercer otro empleo o cargo de la misma naturaleza por cinco años.

CAPITULO II ESTUPRO

Artículo 153.- Al que por medio del engaño tenga cópula con mujer mayor de doce años y menor de diecisiete años que no haya alcanzado su normal desarrollo psicosexual, se le aplicará prisión de seis meses a cinco años.

CAPITULO III INSEMINACION ARTIFICIAL

Artículo 154.- Al que sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o sin o con el consentimiento de una menor de esa edad o incapaz practique en ella inseminación artificial, se le aplicará prisión de dos a seis años. Si como resultado de la conducta se produce embarazo, se impondrá prisión de tres a ocho años.

Artículo 155.- Si la inseminación se realiza con violencia, se incrementará la sanción correspondiente en una mitad.

CAPITULO IV ABUSO SEXUAL

Artículo 156.- Al que sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico sexual, se le aplicará prisión de seis meses a dos años.

Artículo 157.- La misma sanción se aplicará al que ejecute un acto erótico sexual en persona menor de doce años, o que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pueda resistir, ejecute en ella un acto sexual o la haga ejecutarlo.

Artículo 158.- Las penas previstas en los artículos anteriores se incrementarán en una mitad cuando se empleare violencia, se cometa el delito por varias personas, sea el medio para generar pornografía infantil, exista relación de autoridad, de hecho o de derecho, entre el agente y el ofendido, o aquél aprovecha para cometerlo los medios o circunstancias del empleo, oficio o profesión que ejerce.

Artículo 159.- No es punible el acto erótico sexual acompañado de cópula o de tentativa de cópula, típicas y sólo se impondrá la sanción del delito cometido.

TITULO QUINTO DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

CAPITULO I ASALTO

Artículo 160.- Al que, en un lugar solitario o desprotegido, haga uso de la violencia sobre alguna persona con el propósito de lograr su asentimiento para cualquier fin, se le aplicará prisión de dos a nueve años.

**CAPITULO II
AMENAZAS**

Artículo 161.- A quien intimide a otro con causarle daño en su persona o en sus bienes, o en la persona o bienes de un tercero con quien el amenazado tenga vínculos afectivos de cualquier índole, se le aplicará prisión de uno a tres años, sin perjuicio de la pena aplicable, si el agente realiza el mal con el que amenaza.

**TITULO SEXTO
DELITOS CONTRA LA INVOLABILIDAD DE DOMICILIO**

**CAPITULO UNICO
ALLANAMIENTO DE MORADA**

Artículo 162.- Al que sin consentimiento de la persona que legítimamente pueda otorgarlo, o mediante engaño, se introduzca en casa habitación o sus dependencias, o permanezca en ellas sin la anuencia de quien esté facultado para darla, se le aplicará prisión de seis meses a cuatro años.

Si se empleare violencia, la pena se incrementará en una mitad más.

**TITULO SEPTIMO
DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD PERSONAL**

**CAPITULO UNICO
VIOLACION DE LA INTIMIDAD PERSONAL**

Artículo 163.- Se impondrá prisión de seis meses a cinco años, a quien sin consentimiento de otro o sin autorización judicial, en su caso, y para conocer asuntos relacionados con la intimidad de aquél:

I.- Se apodere de documentos u objetos de cualquier clase:

II.- Reproduzca dichos documentos u objetos,

III.- Utilice medios técnicos para escuchar u observar, transmitir, grabar o reproducir la imagen o el sonido.

DELITOS CONTRA LA INVOLABILIDAD DEL SECRETO

**CAPITULO UNICO
REVELACION DE SECRETO**

Artículo 164.- Al que con perjuicio de alguien y sin el consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo revele un secreto o comunicación reservada que ha conocido o recibido para su guarda o para revelarlo o entregarlo a persona determinada, se le aplicará prisión de seis meses a dos años.

Artículo 165.- Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación reservada con motivo de su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, la prisión se aumentará hasta en una mitad más.

**TITULO NOVENO
DELITOS CONTRA LA BUENA FAMA**

**CAPITULO I
DIFAMACION**

Artículo 166.- Al que, mediante comunicación a un tercero realizada con ánimo de dañar, impute a una persona física o colectiva un hecho que afecte su reputación, se le impondrá prisión de seis meses a tres años y multa de cincuenta a doscientos días multa.

Artículo 167.- No se admitirá al inculpado de difamación prueba alguna para acreditar la verdad de su imputación, excepto en los supuestos siguientes:

I.- Cuando aquélla se haya hecho a un servidor público o agente de la autoridad o a cualquier otra persona que haya obrado con carácter público, si la imputación fuere relativa al ejercicio de sus funciones, o

II.- Cuando el hecho imputado esté declarado cierto por sentencia irrevocable y el inculpado obre por interés legítimo, sin ánimo de dañar.

Artículo 168.- No se comete el delito de difamación cuando:

I.- Se manifiesta técnicamente un parecer sobre alguna producción literaria, artística, científica o técnica;

II.- Se expone un juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o conducta de otro, si se probare que se obró en cumplimiento de un deber o por interés público, o que con la debida reserva lo hizo por humanidad, o por prestar un servicio a persona con quien tenga parentesco o amistad o dando informes que se le hayan pedido, o

III.- La imputación se hace a través de un escrito presentado o de un discurso pronunciado en los tribunales, siempre y cuando no se extienda a personas ni a hechos extraños al litigio.

**CAPITULO II
CALUMNIA**

Artículo 169.- Al que impute un hecho que la ley califique como delito a una persona inocente, se le impondrá prisión de seis meses a tres años y multa de cincuenta a doscientos días multa.

Artículo 170.- No se admitirá prueba alguna de su imputación al acusado de calumnia, ni se librará de la sanción correspondiente, cuando exista una sentencia irrevocable que haya absuelto al calumniado del mismo delito que aquél le imputa.

Artículo 171.- Cuando esté pendiente el proceso de un delito imputado calumniosamente, no correrá la prescripción para la persecución de la calumnia o, en su caso, se suspenderá el procedimiento iniciado por esta última hasta que se dicte resolución irrevocable que ponga fin al primer proceso.

**CAPITULO III
DISPOSICIONES COMUNES**

Artículo 172.- Cuando la difamación o calumnia sean en contra de las instituciones estatales o municipales del Estado de Tabasco o de otra entidad federativa o del Distrito Federal, se procederá a solicitud del representante del Ejecutivo que corresponda.

la comisión de la difamación o calumnia, se decomisarán e inutilizarán, a menos que sean documentos públicos, o privados que importen obligación, liberación o transmisión de derechos. En este caso, se hará en el documento una anotación sumaria de la sentencia pronunciada en contra del acusado.

Artículo 174.- Toda sentencia de condena por difamación o por calumnia se publicará a solicitud del ofendido. Si el delito se cometió por medio de un órgano de comunicación social, el fallo se dará a conocer en el mismo órgano y con las mismas características que se hubieren empleado para la realización del delito. En ambos casos, la publicación se hará por cuenta de los responsables.

**TITULO DECIMO
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO**

**CAPITULO I
ROBO**

Artículo 175.- Al que, con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legítimamente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena se le aplicará:

I.- Trabajo en favor de la comunidad de treinta a sesenta días y multa de veinte a sesenta días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de quince veces el salario mínimo, o no sea posible determinar su valor.

II.- Prisión de seis meses a dos años y multa de sesenta a ciento veinte días multa, cuando el valor de lo robado exceda de quince pero no de doscientos cincuenta veces el salario mínimo.

III.- Prisión de dos a cuatro años y multa de ciento veinte a cuatrocientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de doscientos cincuenta pero no de setecientos cincuenta veces el salario mínimo.

IV.- Prisión de cuatro a diez años y multa de cuatrocientos a seiscientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de setecientos cincuenta veces el salario mínimo.

Artículo 176.- Si el apoderamiento se realiza con ánimo de uso se impondrán de seis meses a un año de trabajo en favor de la comunidad. Como reparación del daño, pagará al ofendido el doble del alquiler, arrendamiento o interés de la cosa usada. Si ésta no se halla invertida o sujeta a alquiler o arrendamiento, la reparación se estimará conforme a los valores de mercado.

Artículo 177.- Para determinar la cuantía del robo se atenderá únicamente al valor de cambio que tenga la cosa en el momento del apoderamiento. Si este valor no puede determinarse o si la cosa por su naturaleza no es estimable en valor de cambio, se aplicará prisión de seis meses a cuatro años.

Artículo 178.- Las penas previstas en el artículo 175 y en su caso las previstas en los artículos 179 y 180 se aplicarán también:

I.- Al que aproveche energía eléctrica o cualquier otro fluido, sin consentimiento de la persona que legalmente pueda otorgarlo;

II.- Al que se apodere de cosa mueble propia si ésta se halla en poder de otra persona por cualquier título legítimo;

III.- Al que se apodere de frutos pendientes de los árboles o plantas que le dieron origen, aún cuando éstos se encuentren unidos a la tierra;

IV.- Al que se apodere de objetos de naturaleza transportable aunque se encuentren adheridos a un inmueble.

Artículo 179.- Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el artículo 175 cuando el robo se cometa:

I.- En lugar cerrado, habitado o destinado para habitación, o en sus dependencias, incluidos los muebles;

II.- En una oficina recaudadora, u otra en que se conserven caudales destinados para el pago de sueldos o salarios;

III.- Hallándose el ofendido en un vehículo, particular o de transporte público;

IV.- Aprovechando la confusión causada por una catástrofe o un desorden público;

V.- Respecto de un vehículo automotriz en circulación, estacionado en la vía pública o en otro lugar destinado a su guarda o reparación;

VI.- Aprovechando alguna relación de trabajo, de servicio o de hospitalidad;

VII.- Por quien haya recibido la cosa en detentación subordinada.

VIII.- En despoblado;

IX.- En lugar abierto al público;

X.- Por dos o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos;

XI.- Respecto de equipo, instrumentos, semillas o cualesquiera otros artículos destinados al aprovechamiento agrícola, forestal o pecuario;

XII.- Sobre embarcaciones o cosas que se encuentren en ellas;

XIII.- Sobre equipaje o valores de viajero en cualquier lugar durante el transcurso del viaje; y

XIV.- Respecto de documentos que se conserven en oficinas públicas, cuando la sustracción afecte el servicio público o cause daño a terceros. Si el delito lo comete un servidor público que labore en la dependencia donde cometió el robo, se le aplicará, además, destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos por uno a cinco años.

Artículo 180.- Las penas previstas en el artículo anterior y en el artículo 175 se agravarán con prisión de seis meses a cinco años cuando el robo se cometa con violencia física o moral, independientemente de la sanción que corresponda por el delito que se configure con la violencia.

CAPITULO II ABIGEATO

Artículo 181.- Al que se apodere de una o más cabezas de ganado vacuno, equino o mular sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de las mismas, se le impondrán de seis a doce años de prisión. Si se realiza con violencia la sanción se agravará en una cuarta parte más.

El apoderamiento de ganado asnal o de cualquiera otra de las clases no previstas en el párrafo anterior, se sancionará con prisión de tres a seis años.

Artículo 182.- Se aplicará prisión de uno a cuatro años y multa de veinte a doscientos días multa a quien sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo:

I.- Altere o elimine las marcas o señales de animales ajenos vivos o pieles;

II.- Marque, señale, contramarque o contraseñale animales ajenos;

III.- A quien expida certificados falsos para obtener guías simulando ventas, o haga conducir animales que no sean de su propiedad sin estar debidamente autorizado para ello, o haga uso de certificados o guías falsificados para cualquier negociación sobre ganados o cueros.

Artículo 183.- Se aplicará prisión de dos a siete años y multa de cien a trescientos días multa al que por sí o por medio de otro o para otro adquiera ganado producto del abigeato, o comercie con pieles o carnes u otros derivados obtenidos del abigeato.

Al que transporte ganado, carnes, pieles u otros derivados obtenidos mediante abigeato se le impondrá prisión de uno a tres años y multa de veinte a doscientos días multa.

Artículo 184.- Se aplicará prisión de dos a siete años y multa de treinta a ciento cincuenta días multa al que, por sí o por medio de otro o para otro:

I.- Reciba, ministre, aproveche, o realice actos de intermediario en el comercio de animales producto del abigeato;

II.- Legalice, siendo autoridad, o intervenga en la legalización de documentos confeccionados para acreditar la propiedad de animales producto del abigeato;

III.- Permita, siendo administrador o encargado de algún rastro o lugar de matanza, el sacrificio de ganado producto del abigeato, o

IV.- Permita, siendo inspector de ganadería, el tránsito de ganado producto del abigeato.

Artículo 185.- Al servidor público que participe en el abigeato, además de las penas previstas en los artículos anteriores se le impondrá destitución e inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público de uno a cinco años.

CAPITULO III ROBO DE AVES DE CORRAL

Artículo 186.- El robo de aves de corral se sancionará con prisión de uno a tres años y de uno a veinte días multa.

La reincidencia en el delito previsto en este artículo se castigará con prisión de dos a seis años y de veinte a cuarenta días multa, si fuere la primera; y con prisión de tres a ocho años y de cuarenta a sesenta días multa, la segunda o ulteriores reincidencias.

CAPITULO IV ABUSO DE CONFIANZA

Artículo 187.- Al poseedor derivado de una cosa mueble ajena, que con perjuicio de alguien disponga de ella para sí o para otro, se le aplicarán:

I.- Trabajo en favor de la comunidad de sesenta a ciento veinte días y multa de treinta a noventa días multa, cuando el valor de lo dispuesto no exceda de treinta veces el salario mínimo, o no sea posible determinar su valor;

II.- Prisión de seis meses a dos años seis meses y multa de noventa a doscientos días multa, cuando el monto de la disposición exceda de treinta pero no de trescientos cincuenta veces el salario mínimo;

III.- Prisión de dos años seis meses a cuatro años seis meses y multa de doscientos a cuatrocientos cincuenta días multa, cuando el valor de lo dispuesto exceda de trescientos cincuenta pero no de setecientos cincuenta veces el salario mínimo;

IV.- Prisión de cuatro años seis meses a once años y multa de cuatrocientos cincuenta a seiscientos cincuenta días multa, si el monto de la disposición excede de setecientos cincuenta veces el salario mínimo.

Artículo 188.- Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán:

I.- Al propietario y poseedor de una cosa mueble que, no teniendo la libre disposición sobre la misma a virtud de cualquier título legítimo en favor de tercero, disponga de ella con perjuicio de otro;

II.- Al que haga aparecer como suyo, no siendo de su propiedad, un depósito que garantice la libertad caucional de una persona;

III.- Al que, habiendo recibido mercancías con subsidio o franquicia para darles un destino determinado, las distraiga de ese destino o desvirtúe en cualquier forma los fines perseguidos con el subsidio o la franquicia, o

IV.- A los gerentes, directivos, administradores, mandatarios o intermediarios de personas colectivas, o constructores o vendedores que, habiendo recibido dinero, títulos o valores por el importe total o parcial del precio de alguna compraventa de inmuebles o para constituir un gravamen real sobre éstos, no los destinen en todo o en parte al objeto de la operación concertada y disponga de ellos en provecho propio o de tercero.

CAPITULO V RETENCION INDEBIDA

Artículo 189.- Se aplicarán las penas del abuso de confianza previstas en el artículo 187 al que, teniendo la posesión derivada o la detención subordinada de una cosa mueble ajena, no la entregue a quien tenga derecho a recibirla, siempre y cuando:

I.- La posesión derivada o la detención subordinada se haya vuelto ilegítima por cualquier causa, o, después del cumplimiento o que se renuncie a la tracción anterior, haya sido requerido en forma indubitable para hacer la entrega.

CAPITULO VI FRAUDE

Artículo 190.- Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le aplicarán:

I.- Trabajo en favor de la comunidad de sesenta a ciento veinte días y multa de treinta a noventa días multa cuando el valor de lo defraudado no exceda de treinta veces el salario mínimo, o no sea posible determinar su valor;

II.- Prisión de seis meses a dos años seis meses y multa de noventa a doscientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de treinta pero no de trescientos cincuenta veces el salario mínimo;

III.- Prisión de dos años seis meses a cuatro años seis meses y multa de doscientos a cuatrocientos cincuenta días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de trescientos cincuenta pero no de setecientos cincuenta veces el salario mínimo, y

IV.- Prisión de cuatro años seis meses a once años y multa de cuatrocientos cincuenta a seiscientos cincuenta días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de setecientos cincuenta veces el salario mínimo.

Las mismas sanciones se impondrán a quien por los medios descritos en el primer párrafo cause a otro un perjuicio patrimonial indebido, aunque el agente no obtenga una cosa o un lucro para sí o para otro.

Artículo 191.- Se aplicarán las penas previstas en el artículo anterior, a quien:

I.- Por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho a disponer de ella, o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente;

II.- Obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, como consecuencia directa e inmediata del otorgamiento o endoso a nombre propio o de otro, de un documento nominativo, a la orden o al portador, contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo;

III.- Venda a dos personas una misma cosa, sea mueble o raíz, y reciba el precio de la primera o de la segunda enajenación o de ambas, o parte de él, o cualquier otro lucro, con perjuicio del primero o del segundo comprador;

IV.- Para hacerse del importe del depósito que garantiza la libertad caucional del procesado o detenido, o de parte de él, cuando no le corresponda, haga aparecer dicho depósito como de su propiedad;

V.- Realice un acto jurídico, un contrato o un acto judicial, simulados, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido;

VI.- Siendo fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra emplea en ésta materiales o realiza construcciones de calidad o cantidad inferior a las estipuladas, si ha recibido el precio convenido; o no realice las obras que amparen la cantidad pagada;

VII.- Provoque deliberadamente cualquier acontecimiento, simulando que se trata de caso fortuito o fuerza mayor, para liberarse de obligaciones o cobrar fianzas o seguros;

VIII.- Habiendo recibido dinero, valores o cualquier otra cosa mediante el ofrecimiento de encargarse de la defensa penal de una persona o de la dirección o patrocinio de un asunto civil o administrativo, no realice lo ofrecido, sea porque no se haga cargo legalmente de la defensa o de la dirección o patrocinio o porque renuncie a ella o la abandone sin causa justificada, o

IX.- Por medio de supuesta evocación de espíritus, adivinaciones o curaciones, explote las preocupaciones, la superstición o la ignorancia de las personas.

CAPITULO VII

Artículo 192.- Se aplicarán las sanciones previstas para el fraude al que, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, con perjuicio de su titular y con ánimo de lucro:

I.- Altere las cuentas o las condiciones de los contratos;

II.- Haga aparecer gastos u operaciones inexistentes o exagere los que haya realizado, o

III.- Oculte o retenga valores o los emplee indebidamente.

CAPITULO VIII DELITOS COMETIDOS POR FRACCIONADORES

Artículo 193.- Se impondrán las penas dispuestas para el fraude al que por sí o por interposita persona, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes o sin que se hayan satisfecho los requisitos señalados en el permiso obtenido, y con perjuicio público o privado, fraccione o divida en lotes un terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones, y transfiera o prometa transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre alguno de esos lotes.

Las penas se aplicarán aun cuando el adquirente no haya pagado total o parcialmente el precio.

CAPITULO IX INSOLVENCIA FRAUDULENTA EN PERJUICIO DE ACREDORES

Artículo 194.- Al que mediante cualquier acto, simule un estado de insolvencia con el objeto de eludir las obligaciones que tenga frente a sus acreedores, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

**CAPITULO X
USURA**

Artículo 195.- Al que, Aprovechando la ignorancia, la inexperiencia o la necesidad económica apremiante de una persona, obtenga de ésta mediante convenio formal o informal ganancias notoriamente superiores a las vigentes en el mercado, incrementadas con los costos que tenga para el prestamista la obtención y administración de los recursos, causándole con ello perjuicio económico, se le impondrán de uno a cinco años de prisión. Asimismo se le condenará al resarcimiento, consistente en la devolución de la suma correspondiente a esos mismos intereses excedentes, más los perjuicios ocasionados.

**CAPITULO XI
EXTORSION**

Artículo 196.- Se impondrá prisión de dos a ocho años y multa de cuarenta a ciento sesenta días multa, al que para procurarse a sí mismo o a un tercero un lucro indebido, obligue a una persona a dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo en perjuicio de sus propios bienes patrimoniales o de los de otra persona.

Las penas se aumentarán en una mitad más si el estreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex servidor público o por miembros o ex miembros de alguna corporación policial. En este caso se impondrá, además al responsable, destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos:

Artículo 197.- Se aplicará prisión de uno a cinco años y multa de cuarenta a ciento cincuenta días multa al que, valiéndose del cargo que ocupe en la Administración Pública, en una empresa descentralizada o de participación estatal o en cualquier agrupación de carácter sindical, o de sus relaciones con los funcionarios o dirigentes de dichos organismos, obtenga dinero, valores, dádivas, obsequios o cualquier otro beneficio a cambio de prometer o proporcionar un trabajo, un ascenso, un aumento de salario, una prestación o el reconocimiento u otorgamiento de derechos o beneficios en tales organismos.

**CAPITULO XII
DESPOJO**

Artículo 198.- Se aplicará prisión de dos a ocho años y multa de cien a cuatrocientos días multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, o empleando engaño:

I.- Disponga de un inmueble que ha recibido a título de depositario judicial;

II.- Ocupe un inmueble ajeno, o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca;

III.- Ocupe un inmueble propio que se halle legítimamente en poder de otra persona, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos del ocupante;

IV.- Altere términos o linderos de predios o cualquier clase de señales o mojeneras destinadas a fijar los límites de los predios contiguos, tanto de dominio público como de propiedad particular;

V.- Desvíe o derive las aguas ajenas o haga uso de ellas o de un derecho real que no le pertenezca. o

VI.- Desvíe o derive las aguas propias en los casos en que la ley no lo permita, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos del ocupante.

Artículo 199.- Las sanciones previstas en el artículo anterior se incrementarán en una mitad cuando el despojo se realice por tres o más personas, se emplee violencia física o moral, o se trate de instigadores de dos o más delitos de despojo.

**CAPITULO XIII
DAÑOS**

Artículo 200.- Al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena, o una propia en perjuicio de terceros, se le impondrán las penas previstas para el robo simple.

Las penas se agravarán en una mitad más cuando el daño se realice en bienes de valor científico, artístico, cultural, o de utilidad pública, o se cometa por medio de inundación, incendio, minas, bombas o explosivos.

**CAPITULO XIV
ENCUBRIMIENTO POR RECEPCION**

Artículo 201.- A quien con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, reciba, traslade u oculte el producto de aquél, se le aplicará prisión de uno a cinco años y multa de cincuenta a trescientos días multa. Cuando se acredite que el agente ha incurrido en estas conductas de manera reiterada se incrementarán las penas en una mitad.

**CAPITULO XV
OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILICITA**

Artículo 202.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y multa de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, de en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio del Estado de Tabasco o de éste hacia afuera, o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.

La sanción prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando el delito se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos. En este caso, se impondrá a dichos servidores públicos, además, inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Para los efectos de este artículo, se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

**CAPITULO XVI
DISPOSICIONES COMUNES**

Artículo 203.- No se aplicará sanción alguna por los delitos previstos en este Título, cuando el agente no sea reincidente, si éste restituye el objeto del delito y satisface los daños y perjuicios o, no siendo posible la restitución cubra el valor del objeto más los daños y perjuicios antes de que el Ministerio Público tome conocimiento del delito, salvo que se trate de delitos calificados o de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En los mismos supuestos considerados en el párrafo anterior, se reducirá en una mitad la sanción que corresponda al delito cometido, si antes de dictarse sentencia el agente restituye la cosa o entrega su valor, satisface los daños y perjuicios causados.

Artículo 204.- Las disposiciones del artículo anterior no son aplicables a los servidores públicos.

Artículo 205.- En los casos previstos en este Título, el juzgador podrá suspender al agente en el ejercicio de los derechos civiles que tenga en relación con el ofendido, o privarlo de ellos. Asimismo, podrá aplicar estas mismas sanciones por lo que respecta a los derechos para ser perito, depositario, interventor judicial, síndico o representante de ausentes, y para el ejercicio de una profesión cuyo desempeño requiera título profesional.

**SECCION SEGUNDA
DELITOS CONTRA LA FAMILIA**

**TITULO I
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
DE LA SUBSISTENCIA FAMILIAR**

**CAPITULO UNICO
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DE ASISTENCIA FAMILIAR**

Artículo 206.- Al que no proporcione los recursos necesarios para la subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, se le aplicará prisión de seis meses a dos años, multa de cincuenta a doscientos cincuenta días multa, y suspensión de uno a cinco años de los derechos de familia en relación con aquéllos.

Se aplicarán las mismas sanciones del párrafo precedente a quien se coloque en estado de insolvencia con el propósito de incumplir sus obligaciones de asistencia alimentaria.

Artículo 207.- Si la omisión mencionada en el artículo anterior ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una tercera parte.

Artículo 208.- No se impondrá pena alguna o no se ejecutará la impuesta cuando el agente satisfaga todas las cantidades que haya dejado de suministrar o se someta al régimen de pago que determine el juez o la autoridad ejecutora y, además garantice el cumplimiento de las cantidades que en el futuro deba satisfacer. El juez podrá afectar una parte del producto del trabajo del obligado para satisfacer estas obligaciones.

**TITULO SEGUNDO
DELITOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS FAMILIARES**

**CAPITULO I
SUSTRACCION O RETENCION DE MENORES
O INCAPACES**

Artículo 209.- Se impondrá prisión de uno a cinco años al que con el fin de sustraer a un menor o incapaz de su custodia legítima, o lo retenga sin el consentimiento de quien tenga su legítima custodia o guarda.

Artículo 210.- Si el agente devuelve, espontáneamente, al menor o al incapaz dentro de los tres días siguientes a la comisión del delito, se le impondrá una tercera parte de las penas antes señaladas.

**CAPITULO II
TRAFICO DE MENORES**

Artículo 211.- Se aplicará prisión de dos a siete años y multa de cien a quinientos días multa al que a cambio de un beneficio económico y con el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tenga legalmente la custodia sobre el menor, lo entregue ilegítimamente a un tercero para su custodia definitiva. Las mismas sanciones se impondrán a quien en las circunstancias antes señaladas consienta o entregue directamente al menor y al tercero que lo reciba.

Cuando no exista la finalidad de obtener un beneficio económico se aplicará prisión de uno a cuatro años.

Si el agente actúa sin el consentimiento de las personas mencionadas en el primer párrafo de este artículo o el menor es trasladado fuera del territorio mexicano las penas se aumentarán en una mitad.

Artículo 212.- Se aplicará prisión de uno a cuatro años a quien, con el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tenga legalmente la custodia sobre el menor, entregue a éste ilegítimamente a un tercero con el fin de que sea

incorporado al núcleo familiar de dicha persona y goce de los beneficios propios de la incorporación. Las mismas sanciones se impondrán a quien en las circunstancias antes señaladas consienta o entregue directamente al menor y al tercero que reciba al menor.

Artículo 213.- Además de las penas señaladas en los artículos precedentes, los responsables de los delitos perderán los derechos que tengan en relación con el menor, incluso los de carácter sucesorio.

Artículo 214.- Si el agente devuelve al menor, espontáneamente, dentro de los tres días siguientes a la comisión del delito, se le impondrá una tercera parte de la sanción prevista en los artículos anteriores.

**CAPITULO III
EXPOSICION DE INCAPACES**

Artículo 215.- Al que tenga legalmente la obligación de hacerse cargo de una persona incapaz de cuidarse a sí misma, la entregue a una institución o a una persona, incumpliendo la ley, o contraviniendo la voluntad de quien se la confió y sin dar aviso a la autoridad competente, se le aplicará prisión de uno a cuatro años.

No se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo por ignorancia o extrema pobreza, o cuando aquél sea el producto de una violación o una inseminación artificial sin consentimiento.

**TITULO TERCERO
DELITOS CONTRA LA FILIACION**

**CAPITULO I
SUPRESION DEL ESTADO CIVIL**

Artículo 216.- Se aplicará prisión de uno a cinco años y, en su caso, privación de los derechos de familia o de tutela en relación con el supreso, al que con el fin de hacer perder a una persona los derechos derivados de su filiación:

I. Omite inscribirla en el registro civil, teniendo la obligación de hacerlo.

II. La inscriba o haga inscribir en el Registro Civil ocultando su filiación o con una filiación inexistente.

III. Declare falsamente un parentesco que no exista, o que exista un parentesco que no exista, cuando el agente actúa por motivos noíes o humanitarios.

**CAPITULO II
USURPACION DE FILIACION O DE ESTADO CIVIL**

Artículo 217.- Se aplicará prisión de uno a cinco años al que, con el fin de adquirir derechos de familia que no le correspondan, inscriba o haga inscribir un nacimiento inexistente o usurpe el estado civil de otro.

**CAPITULO III
CAMBIO DE MENOR**

Artículo 218.- Al que cambie o haga cambiar a un menor por otro para ocasionarle perjuicio en sus derechos de familia, se le aplicará prisión de uno a cinco años.

**TITULO CUARTO
DELITOS CONTRA LA INSTITUCION
DEL MATRIMONIO Y EL ORDEN SEXUAL**

**CAPITULO I
BIGAMIA**

Artículo 219.- Se impondrá prisión de uno a tres años al que estando legalmente unido en matrimonio, con una persona, contraiga nuevo matrimonio con las formalidades legales. La misma pena se aplicará al otro nuevo conyugente.

**CAPITULO II
MATRIMONIOS ILEGALES
DE CONVALIDACION PROHIBIDA**

Artículo 220.- Al que sin incurrir en bigamia, contraiga matrimonio cuando para ello exista un impedimento que determine la nulidad absoluta de la unión matrimonial se le impondrán de uno a tres años de prisión.

**CAPITULO III
INCESTO**

Artículo 221.- Se aplicará prisión de uno a tres años al que tenga cópula con su descendiente o ascendiente consanguíneo en línea recta o con su hermana o hermano.

**CAPITULO IV
ADULTERIO**

Artículo 222.- Se aplicará de tres meses a dos años de prisión, a los culpables de adulterio consumado en el domicilio conyugal o con escándalo.

**SECCION TERCERA
DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD**

**TITULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS BIENES JURIDICOS**

**CAPITULO I
COMISION DE DELITO POR MEDIO DE OTRA PERSONA**

Artículo 223.- Al que lleve a cabo un delito valiéndose de otra persona, se le aplicarán las sanciones previstas para la comisión dolosa de ese delito.

**CAPITULO II
INSTIGACION A COMETER DELITO**

Artículo 224.- Al que instigue a otro a cometer un delito, se le impondrá:

I.- Las tres cuartas partes de la sanción aplicable al delito que fue motivo de la instigación, o

II.- La sanción correspondiente al delito instigado, cuando la persona instigada sea un menor o un inimputable o se encuentre bajo los efectos de bebidas embriagantes o de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares.

**CAPITULO III
AYUDA EN LA COMISION DE UN DELITO**

Artículo 225.- Al que ayude a otro a cometer un delito, se le impondrán dos tercios de la sanción aplicable al delito para cuya comisión prestó la ayuda.

**CAPITULO IV
AYUDA AL AUTOR DE UN DELITO**

Artículo 226.- Al que, con posterioridad a la comisión de un delito, ayude al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito, se le impondrán dos tercios de la sanción aplicable al delito cometido por la persona a la cual prestó la ayuda.

**CAPITULO V
ACUERDO EN LA COMISION DE UN DELITO**

Artículo 227.- Al que acuerde con otro la comisión de un delito y al cometerlo no intervenga en su ejecución, se le impondrá la mitad de la sanción aplicable al delito acordado; pero si dicho delito hace posible la comisión de otro delito distinto, en cuya ejecución sí interviene, se le aplicará la sanción del delito acordado, sin perjuicio de la sanción que corresponda al delito en el cual sí intervino.

**CAPITULO VI
OMISION DE IMPEDIR LA COMISION DE UN DELITO**

Artículo 228.- A quien, al intervenir junto con otros en la realización de un delito previamente acordado, no impida que alguno de los demás intervinientes ejecute en su presencia y sin su previo acuerdo:

I.- Un delito distinto que haga posible la comisión del delito previamente acordado, se le aplicará la sanción correspondiente al distinto delito cometido, o

II.- Un delito cualquiera distinto del previamente acordado, se le aplicará la mitad de la sanción correspondiente al distinto delito cometido.

Artículo 229.- Se aplicará prisión de nueve meses a tres años al que no procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance, impedir la comisión de los delitos que van a cometerse o se están cometiendo.

**CAPITULO VII
PROVOCACION A LA COMISION DE UN DELITO O
APOLOGIA DEL DELITO**

Artículo 230.- Al que públicamente provoque a otro a cometer un delito, o haga apología de éste se le aplicará de cuatro meses a un año de semilibertad.

**CAPITULO VIII
ASOCIACION DELICTUOSA**

Artículo 231.- Cuando tres o más personas integren una asociación formal o informal con la finalidad de cometer delitos, de manera permanente o transitoria, se impondrá a los integrantes de dos a ocho años de prisión y de cien a quinientos días multa, además de las sanciones aplicables por los delitos cometidos. Cuando los miembros de la asociación delictuosa incurran en alguno de los delitos considerados como graves por la ley, la sanción podrá aumentarse hasta en una tercera parte.

Quando el agente sea o haya sido servidor público en alguna institución de procuración o administración de justicia las sanciones se incrementarán en una mitad más. En estos casos se aplicará, asimismo, destitución e inhabilitación para obtener otro cargo, empleo o comisión hasta por diez años.

**TITULO SEGUNDO
DELITOS CONTRA EL ERARIO Y
EL SERVICIO PUBLICOS**

**CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
SOBRE SERVIDORES PUBLICOS**

Artículo 232.- Para los efectos de este Código es servidor público del Estado toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública centralizada o descentralizada del Estado, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a aquéllas, fideicomisos públicos, en el Congreso del Estado, en el Poder Judicial Estatal o en la administración municipal.

Artículo 233.- Los servidores públicos que cometan alguno de los delitos previstos en el presente Título, además de las sanciones previstas en los diversos capítulos serán destituidos e inhabilitados para desempeñar otro empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público hasta por el mismo tiempo que la pena privativa de la libertad impuesta, a juicio del juez.

**CAPITULO II
INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PUBLICAS**

Artículo 234.- Comete el delito de incumplimiento de funciones públicas el servidor público que para impedir el cumplimiento de una ley, decreto, reglamento o resolución judicial o administrativa o el cobro de una contribución fiscal utilice el auxilio de la fuerza pública. Al responsable de este delito se le impondrá de dos a ocho años de prisión y multa de cien a doscientos días multa.

**CAPITULO III
EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PUBLICO**

Artículo 235.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público. el servidor público que:

I.- Ejercza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales;

II.- Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido, o después de haber renunciado, salvo que por disposición de la ley deba continuar ejerciendo sus funciones hasta ser relevado;

III.- Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que puedan resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de las mencionadas en el artículo 232 por cualquier acto u omisión, no informe por escrito a su superior jerárquico o no lo evite si está dentro de sus facultades; o

IV.- Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentra bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.

Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se le impondrá prisión de tres meses a un año y multa de treinta a cien días multa.

Al que cometa los delitos previstos en las fracciones III y IV, se le impondrá de dos a siete años de prisión y multa de treinta a trescientos días multa.

**CAPITULO IV
ABUSO DE AUTORIDAD**

Artículo 236.- Comete el delito de abuso de autoridad el servidor público cuando:

I.- Para impedir la ejecución de una ley, decreto, reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza

II.- Ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia contra alguna persona o la vejare, o la insultare;

III.- Indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud;

IV.- Estando encargado de una fuerza pública y requerido legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio, se niegue indebidamente a dárselo;

V.- Haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le hayan confiado y se los apropie o disponga de ellos indebidamente;

VI.- Con cualquier pretexto, obtenga de un subalterno parte de los sueldos de éste, dádivas u otro servicio;

VII.- En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos, o contrato de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza que sean remunerados a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se nombró al designado, o no se cumplirá el contrato otorgado;

VIII.- Autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y

IX.- Otorgue cualquier identificación en que acredite como servidor público a una persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a los que haga referencia en dicha identificación.

Al que cometa el delito de abuso de autoridad, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa de cien a trescientos días multa.

**CAPITULO V
COALICION**

Artículo 237.- Se impondrá de dos a siete años de prisión y multa de cien, a doscientos días multa, a los servidores públicos que se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, para evitar su ejecución, o impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas.

**CAPITULO VI
CONCUSION**

Artículo 238.- Comete el delito de concusión el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa indebida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley.

Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes sanciones:

Quando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el lugar y en el momento en que se cometa el delito, o no sea valuable, se impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de treinta a trescientos días multa.

Quando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo, antes señalado, se impondrá prisión de dos a doce años y multa de trescientos a quinientos días multa.

**CAPITULO VII
INTIMIDACION**

Artículo 239.- Comete el delito de intimidación el servidor público que:

I.- Por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhíba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querrela o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la correspondiente a la responsabilidad de

II.- Con motivo de la querrela, denuncia o información a que hace referencia la fracción anterior, realice una conducta ilícita u omita una lícita debida, que lesione los intereses de las personas que las presenten o aporten, o de algún tercero con quien dichas personas guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo.

Al que cometa el delito de intimidación, se le impondrá de dos a nueve años de prisión y multa de treinta a trescientos días multa.

**CAPITULO VIII
EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES**

Artículo 240.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, el servidor público que:

I.- En el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad, o por afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte; o

II.- Valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, realice por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la primera fracción de este artículo.

Al que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones se le impondrán las siguientes sanciones:

Quando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo no exceda del equivalente a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el lugar y momento en que se cometa el delito, o no sea valuable, se impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de cien a doscientos días multa.

Quando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo exceda del equivalente a quinientas veces el salario antes anotado, se impondrá prisión de dos a doce años y multa de treinta a doscientos días multa.

CAPITULO IX TRAFICO DE INFLUENCIA

Artículo 241.- Comete el delito de tráfico de influencia, el servidor público que:

I.- Por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.- Por sí, o por interpósita persona indebidamente solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto material del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo 240.

Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrá pena de dos a seis años de prisión y multa de doscientos a trescientos días multa.

CAPITULO X COHECHO

Artículo 242.- Comete el delito de cohecho el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al servidor público que cometa el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Quando la cantidad o valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el lugar y momento en que se comete el delito, o no sea valuable, se impondrá de seis meses a dos años de prisión, y multa de treinta a trescientos días multa.

Quando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo antes anotado, se le impondrá prisión de dos a doce años, y multa de trescientos a quinientos días multa.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, que se aplicarán en beneficio de la procuración y la administración de justicia del Estado.

CAPITULO XI PECULADO

Artículo 243.- Comete el delito de peculado, el servidor público que:

I.- Para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a los poderes, dependencias o entidades a que se refiere el artículo 232, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa; o

II.- Utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo 240 con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.

Al servidor público que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:

Quando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo diario vigente en el lugar y el momento en que se comete el delito, o no sea valuable, se impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de treinta a trescientos días multa.

Quando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo antes anotado, pero no de quinientas veces se impondrá prisión de dos a cinco años.

Quando exceda de quinientas veces dicho salario mínimo, se impondrá prisión de cinco a catorce años y multa de trescientos a quinientos días multa.

CAPITULO XII ENRIQUECIMIENTO ILICITO

Artículo 244.- Comete el delito de enriquecimiento ilícito el servidor público que, fuera de los supuestos previstos en este Título, utilice su puesto, cargo o comisión para incrementar su patrimonio. Para determinar el enriquecimiento del servidor público se tomarán en cuenta los bienes a su nombre y aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, además de lo que a este respecto disponga la legislación sobre responsabilidades de los servidores públicos.

Al servidor público que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones:

Quando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente a cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el lugar y el momento en que se comete el delito, se impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de treinta a trescientos días multa.

Quando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente a cinco mil veces el salario mínimo antes anotados, se impondrá prisión de dos a doce años y multa de ciento cincuenta a trescientos días multa.

Asimismo se aplicará decomiso en beneficio de la procuración y la administración de justicia del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre responsabilidades de los servidores públicos.

CAPITULO XIII DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES EN RELACION CON SERVIDORES PUBLICOS

Artículo 245.- A quien promueva una conducta ilícita de un servidor público o se preste a que éste, por sí o por interpósita persona, promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, se le impondrá prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días multa.

Artículo 246.- Al particular que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a un servidor público, directamente o por interpósita persona, para que dicho servidor haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones, se le aplicarán las sanciones contenidas en el artículo 242.

En ningún caso se devolverá a los responsables de este delito el dinero o dádivas entregadas; dicho dinero o dádivas se aplicarán en beneficio de la procuración y la administración de justicia.

Artículo 247.- La pena señalada en el artículo anterior se reducirá en una mitad, en los siguientes casos:

I.- Cuando el cohechador denuncie espontáneamente el delito cometido; y

II.- Cuando el cohechador hubiere actuado por motivos nobles, para beneficiar a una persona con la que lo ligue un vínculo familiar, de amistad, gratitud o dependencia.

Artículo 248.- Al particular que solicite o acepte realizar una promoción de la imagen política o social de un servidor público o de un tercero, o una denigración de cualquier persona con fondos públicos utilizados indebidamente, se le aplicará:

I.- Prisión de tres meses a dos años y multa de treinta a trescientos días multa, cuando el monto de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente a quinientas veces el salario mínimo vigente en el lugar y el momento en que se cometió el delito; y

II.- Prisión de dos a nueve años y multa de trescientos a quinientos días multa, cuando el monto de los fondos utilizados indebidamente exceda del salario mínimo antes anotado.

Artículo 249.- Se estará a los términos del artículo 187 cuando el particular obligado legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les de una aplicación distinta a la que se les destinó.

Artículo 250.- Al que haga figurar como suyos, bienes que un servidor público adquiriera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la legislación sobre responsabilidades de los servidores públicos, se le aplicará:

I.- De tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientos días multa, cuando el monto de los bienes no exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el lugar y el momento en que se cometió el delito;

II.- De dos a catorce años de prisión y multa de trescientos a quinientos días multa, cuando el monto de los bienes exceda del equivalente a dicho múltiplo del salario mínimo.

CAPITULO XIV USURPACION DE FUNCIONES PUBLICAS

Artículo 251.- Se aplicará prisión de uno a seis años y multa de treinta a cien días multa, al que sin ser servidor público se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal.

TITULO TERCERO DELITOS CONTRA LAS GARANTIAS RECTORAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL

CAPITULO I ORDEN DE APREHENSION ILEGITIMA

Artículo 252.- Se aplicará prisión de dos a ocho años y multa de cien a trescientos días multa al juez que libre una orden de aprehensión cuando:

I.- No exista denuncia o, en los juicios que la requieran, no haya sido formulada la querrela por quien legalmente pueda hacerlo;

II.- La punibilidad no sea privativa de la libertad; o, siéndolo, esté señalada en

III.- El Ministerio Público no haya solicitado la orden.

CAPITULO II APREHENSION ILEGAL

Artículo 253.- Se aplicará prisión de dos a ocho años y multa de cien a trescientos días multa al servidor público que sin orden de aprehensión, librada por la autoridad judicial, aprehenda a una persona por delito no flagrante, o no urgente.

CAPITULO III RETARDO ILEGITIMO EN LA ENTREGA DE UN DETENIDO

Artículo 254.- Se aplicará prisión de uno a cinco años y multa de cien a doscientos días multa al servidor público que, habiendo realizado una aprehensión en flagrante delito, o habiendo recibido a un detenido que fue aprehendido en flagrante delito por cualquier persona, no lo ponga inmediatamente a disposición del Ministerio Público.

Artículo 255.- Se aplicará prisión de dos a ocho años y multa de cien a trescientos días multa al agente del Ministerio Público que habiendo recibido un detenido que fue aprehendido en flagrante delito por un particular o por otro servidor público, no lo ponga a disposición del juez dentro de las cuarenta y ocho horas, siguientes al momento en que dicho detenido le fue entregado, o dentro de las noventa y seis si se trata de casos que la ley prevea como delincuencia organizada.

La misma sanción se aplicará al servidor público de la Policía Judicial o del Ministerio Público, en su caso, que no ponga al detenido a disposición del juez dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprehensión, cuando ésta se realice en cumplimiento de una orden de aprehensión.

Si la aprehensión se verifica fuera del lugar en que reside el juez, al tiempo señalado en los párrafos anteriores se agregará el necesario para recorrer la distancia que haya entre el lugar de la aprehensión o recepción y el lugar de residencia del juez.

CAPITULO IV DETENCION Y PRISION PREVENTIVA ILEGITIMA

Artículo 256.- Se aplicará prisión de dos a ocho años y multa de cien a trescientos días multa al servidor público que:

I.- No otorgue la libertad provisional legalmente procedente, cuando ésta haya sido solicitada;

II.- Prolongue, sin auto de sujeción a proceso con prisión preventiva, la detención de un acusado, por más de setenta y cinco horas;

III.- Prolongue, sin sentencia final, la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley;

IV.- Demore injustificadamente el cumplimiento de la resolución judicial que ordena poner en libertad a un detenido;

V.- No cumpla la orden de libertad girada por la autoridad administrativa competente;

VI.- No haga cesar inmediatamente, teniendo atribuciones para hacerlo, una privación ilegal de la libertad, o

VII.- No denuncie inmediatamente, ante la autoridad competente, una privación ilegal de la libertad.

CAPITULO V RETARDO ILEGITIMO DE LA SUJECION O NO SUJECION A PROCESO

Artículo 257.- Se aplicará prisión de dos a ocho años y multa de cien a trescientos días multa al juzgador que no dicte, según el caso y dentro de las setenta y cinco horas siguientes al momento en que el acusado fue puesto o se puso voluntariamente a su disposición:

II.- El auto de sujeción a proceso sin prisión preventiva;

III.- El auto de no sujeción a proceso y, en consecuencia, el auto de libertad, o

IV.- El simple auto de no sujeción a proceso.

CAPITULO VI FUNCION PERSECUTORIA Y JUDICIAL INDEBIDA

Artículo 258.- Se aplicará prisión de dos a ocho años y multa de cien a trescientos días multa al servidor público que:

I.- Se niegue a recibir una denuncia o querrela o impida o retarde la presentación de la misma;

II.- Se abstenga de ejercitar la acción penal cuando sea procedente conforme a la Constitución y a las leyes correspondientes;

III.- Competa, por cualquier medio al indiciado o al acusado a declarar en su contra;

IV.- Incomunique al indiciado o acusado;

V.- No le haga saber al inculcado, desde el momento mismo en que éste le fue entregado o voluntariamente se puso a su disposición, el derecho que tiene a nombrar defensor y a que éste se halle presente en todos los actos del procedimiento;

VI.- No le dé al inculpado oportunidad de nombrar defensor desde el momento mismo en que aquél le fue entregado o voluntariamente se puso a su disposición, o no le nombre uno de oficio si el inculpado se niega a nombrarlo;

VII.- No le haga saber al inculpado, en audiencia pública y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que éste le fue consignado o voluntariamente se puso a su disposición:

- a) El nombre del denunciante o del querellante;
- b) La naturaleza y causa de la acusación;
- c) El tipo y la punibilidad correspondientes al delito que se le atribuye;
- d) La responsabilidad que se le atribuye;
- e) Todos los datos necesarios para que conozca bien el hecho y pueda contestar el cargo.

VIII.- No tome al inculpado su declaración preparatoria; o se la tome, sin audiencia pública, o después de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que aquél le fue consignado o voluntariamente se puso a su disposición, o sin hacerle saber previamente toda la información a que se refiere la fracción anterior de este mismo artículo.

Artículo 259.- Se aplicará prisión de uno a cinco años y multa de cien a trescientos días multa al servidor público que:

- I.- Niegue, a quien tenga derecho a saber, que una persona está detenida;
- II.- Habiendo recibido a una persona, en el establecimiento de detención o internamiento a su cargo, no haga saber inmediatamente este hecho a la autoridad correspondiente;
- III.- Bajo cualquier pretexto, cobre alguna cantidad de dinero o imponga alguna contribución o gabela en cualquier lugar de detención o de internamiento,

Artículo 260.- Se aplicará prisión de dos a ocho años y multa de cien a trescientos días multa al servidor público que ordene o practique un cateo o visita domiciliaria fuera de los casos autorizados por la ley.

CAPITULO VII TORTURA

Artículo 261. Comete el delito de tortura, cualquier servidor público del Estado o de los Municipios, que por sí, o valiéndose de tercero y en el ejercicio de sus funciones, inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves o la coacción física o moralmente:

- I. Con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión;
- II. De inducirla a un comportamiento determinado o,
- III. De castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido.

No se consideran torturas las penalidades o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legales o que sean inherentes o incidentales a ellas.

Artículo 262. Al que cometa el delito de tortura se le sancionará con pena privativa de libertad de tres a catorce años, multa de doscientos a quinientos días multa, privación de su cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por dos tercios del tiempo de duración de la pena de prisión impuesta.

Si además de tortura, resulta delito diverso, se estará a las reglas del concurso material de delitos.

No se justificará la tortura porque se invoquen o existan circunstancias excepcionales, como inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones o cualquiera otra emergencia.

En el momento que lo solicite cualquier detenido o reo, deberá ser reconocido por perito médico legista o por un facultativo médico de su elección. Quien haga el reconocimiento queda obligado a expedir, de inmediato el certificado del mismo.

Ninguna declaración que haya sido obtenida mediante tortura, podrá invocarse como prueba.

Cualquier autoridad que conozca de un hecho de tortura, está obligada a denunciarlo de inmediato.

CAPITULO VIII DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 263.- Además de las punibilidades previstas en los diversos capítulos de este Título, se aplicarán destitución e inhabilitación de cinco a quince años para obtener y desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público, y decomiso de los productos del delito.

TITULO CUARTO

DELITOS CONTRA LA RECTITUD DE LA FUNCION PERSECUTORIA Y DE LA JUDICATURA

CAPITULO I EJERCICIO LABORAL LEGALMENTE PROHIBIDO

Artículo 264.- Se aplicará prisión de uno a cinco años y multa de cien a trescientos días multa al juzgador y al agente del Ministerio Público que:

- I.- Desempeñe algún otro empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público, o de naturaleza privada, que la ley le prohíba, o
- II.- Litigue, por sí o por interpósita persona, cuando la ley le prohíba el ejercicio de su profesión.

Artículo 265.- La misma sanción se aplicará al que, como interpósita persona de un servidor público, litigue cuando la ley prohíba a dicho servidor público el ejercicio de su profesión.

CAPITULO II ASESORIA ILEGITIMA DE LITIGANTES

Artículo 266.- Se aplicará prisión de dos a ocho años y multa de cien a trescientos días multa al servidor público que dirija o aconseje a las personas que litiguen ante él.

CAPITULO III DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 267.- Además de las punibilidades previstas en los capítulos de este Título, se aplicarán destitución e inhabilitación de uno a cinco años para obtener y desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público.

TITULO QUINTO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

CAPITULO I PREVARICACION

Artículo 268. Se aplicará prisión de dos a ocho años y multa de doscientos a cuatrocientos días multa al servidor público que:

- I.- Dicte una sentencia definitiva que viole algún precepto terminante de la ley, o que sea contraria a las actuaciones legalmente practicadas en el juicio o al veredicto de un jurado;

II.- Ponga injustificadamente en libertad a un detenido;

III.- Permita fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de las personas que estén privadas de la libertad, o

IV.- Sin causa fundada, no cumpla una disposición de su superior competente y que le haya sido legalmente notificada.

Artículo 269.- Se aplicará prisión de uno a cinco años y multa de cien a trescientos días multa al servidor público que:

- I.- Conozca de un negocio respecto del cual tenga impedimento legal;
- II.- Ejecute un acto, o incurra en una omisión, que dañe jurídicamente a alguien o le conceda una ventaja indebida;
- III.- Remate para él, por sí o por medio de otro, algún bien objeto del remate en cuyo juicio haya intervenido;
- IV.- Sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, admita o nombre un depositario, o entregue al depositario los bienes secuestrados;
- V.- Indebidamente haga conocer al demandado la providencia de embargo decretada en su contra, o
- VI.- Nombre síndico o interventor, en un concurso o quiebra a un deudor o pariente del fallido, a un abogado o exabogado del fallido, a un pariente o amigo estrecho del servidor público, o a persona ligada con el servidor público por algún negocio de interés común.

Artículo 270.- Se aplicará prisión de dos a seis años y multa de cien a trescientos días multa al que, como intermediario de un servidor público, remate algún bien objeto del remate en cuyo juicio haya intervenido dicho servidor público.

CAPITULO II DENEGACION DE JUSTICIA

Artículo 271.- Se aplicará prisión de uno a cinco años y multa de cien a trescientos días multa al servidor público que:

- I.- Se abstenga, sin tener impedimento legal, de conocer un negocio que le corresponda;
- II.- Omite dictar, dentro del plazo legal, una sentencia definitiva o cualquier otra resolución de fondo o de trámite;
- III.- Retarde o entorpezca la administración de justicia, o

... de un negocio pendiente ante él.

CAPITULO III VIOLACION DE FUERO

Artículo 272.- Se aplicará prisión de dos a ocho años y multa de cien a trescientos días multa, al servidor público que detenga o ejercite acción penal en contra de alguno de los servidores públicos a que se refiere el artículo 69 de la Constitución Política del Estado, sin haberse emitido la declaración de procedencia a que se refiere el mismo precepto.

Igual sanción se aplicará al juez que instaure una causa penal en contra de un servidor público de los citados en el párrafo anterior y en el caso ahí previsto.

CAPITULO IV OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA

Artículo 273.- Al que por cualquier medio influya en quien es denunciante o parte, abogado, promovente, perito, intérprete o testigo en un procedimiento, para que se retracte de su denuncia, desista de la acción o deje de prestar su defensa, representación, declaración, informe o traducción, o los preste faltando a su deber o a la verdad, se le impondrá de uno a dos años de prisión y multa de cien a trescientos días multa. Cuando el medio empleado sea la violencia, las penas se incrementarán en una mitad.

Si el autor del hecho alcanza su objetivo, se le aplicará prisión de dos a cuatro años y multa de doscientos a quinientos días multa.

CAPITULO V EVASION DE PRESOS

Artículo 274.- Se aplicará prisión de uno a nueve años al que favorezca la evasión de una persona detenida, procesada o condenada.

Si quien incurre en delito es un servidor público la pena será de dos a doce años de prisión y además se le impondrá destitución e inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta.

Artículo 275.- Si para favorecer la fuga se hubiere empleado violencia en las personas o fuerza en las cosas, se aplicará, además la sanción que corresponda por el delito que resulte por los medios empleados.

Artículo 276.- Si el que favorece la fuga fuera el ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina o concubinario, hermano del prófugo o parientes por afinidad hasta el segundo grado, se les aplicará prisión de tres meses a un año, salvo que hayan proporcionado la fuga por medio de la violencia física o moral o causando daño se les impondrán prisión de seis meses a dos años.

Artículo 277.- Se incrementarán en una mitad las sanciones previstas en el artículo 274 según corresponda, cuando se proporcione al mismo tiempo o en un solo acto, la evasión de dos o más personas privadas legalmente de su libertad.

Artículo 278.- Si la reaprehensión del evadido se logra por gestiones del responsable de la evasión, se aplicará una tercera parte de la sanción correspondiente.

Artículo 279.- Al preso que se evada no se le aplicará sanción alguna salvo que obre en concierto con otro u otros presos y se fugue algunos de ellos, o ejerza violencia física o moral o cause daño. En estos casos se aplicará prisión de seis meses a dos años.

CAPITULO VI QUEBRANTAMIENTO DE SANCIONES

Artículo 280.- Al que por medio de la violencia física o moral o causando daño quebrante la pena no privativa de la libertad que se haya impuesto en sentencia

La misma sanción se aplicará a quien favorezca el quebrantamiento de sanción. Si éste es el encargado de la ejecución, la sanción se incrementará en una tercera parte y se impondrá, además, destitución e inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público hasta por cinco años.

CAPITULO VII INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ABOGADOS, DEFENSORES Y LITIGANTES

Artículo 281.- Se impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de noventa a doscientos días multa a quien:

- I.- Abandone una defensa o negocio;
- II.- Asista o ayude a dos o más contendientes o partes con intereses opuestos en un mismo negocio o en negocios conexos, o acepte el patrocinio de alguno y admita después el de la parte contraria en un mismo negocio;
- III.- Alegue hechos falsos;
- IV.- Usando cualquier recurso, incidente o medio notoriamente improcedente o ilegal procure perder un juicio, en perjuicio de la persona que representa o defienda;
- V.- Como defensor de un inculpado sólo se concrete a aceptar el cargo y a solicitar la libertad provisional, sin promover más pruebas ni diligencias tendientes a la defensa del inculpado, o

VI.- Como defensor de un inculpado, no ofrezca ni desahogue pruebas fundamentales para la defensa dentro de los plazos previstos por la ley, teniendo la posibilidad de ofrecerlas y desahogarlas.

Si el responsable de los delitos previstos en este artículo fuere defensor particular, se le aplicará, además, suspensión hasta por cinco años en el ejercicio de la profesión. Si fuese defensor de oficio, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público hasta por cinco años, salvo que la ley disponga otra cosa.

CAPITULO VIII EJERCICIO INDEBIDO DEL PROPIO DERECHO

Artículo 282.- Al que por medio de la violencia física o moral haga efectivo su derecho, se le aplicará prisión de tres meses a un año.

CAPITULO IX ENCUBRIMIENTO POR FAVORECIMIENTO

Artículo 283.- Se aplicará prisión de seis meses a cinco años, sin exceder de la sanción aplicable por el delito encubierto, al que después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste:

I.- Ayude, en cualquier forma al delincuente a eludir las investigaciones de la autoridad competente o a sustraerse a la acción de ésta;

II.- Oculte, altere, inutilice, destruya, remueva o haga desaparecer los indicios, instrumentos u otras pruebas del delito, o

III.- Asegure para el inculpado el producto o provecho del delito.

Artículo 284.- La sanción prevista en el artículo anterior se impondrá:

I.- Al que pudiendo impedir un delito, con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, se abstuviere voluntariamente de hacerlo;

II.- Al que requerido por la autoridad, no dé auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los delincuentes; y

III.- Al que conociendo la procedencia ilícita de las mercancías las reciba en prenda o depósito.

Artículo 285.- No se impondrá sanción alguna en los casos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 283 y II del 284, cuando el encubridor sea:

I.- Ascendiente o descendiente consanguíneos en línea recta, por adopción o por afinidad;

II.- Cónyuge, concubina o concubinario o pariente consanguíneo en línea colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo, o

III.- Persona ligada con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.

TITULO SEXTO DELITOS CONTRA LA VERACIDAD NECESARIA PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

CAPITULO I PRESENTACION DE DENUNCIAS O QUERELLAS FALSAS

Artículo 286.- Se aplicará prisión de dos a seis años y multa de trescientos a quinientos días multa, al denunciante o querellante que impute a alguien un hecho delictuoso falso, o verdadero a persona inocente.

No se procederá contra el autor de este delito, sino cuando la inocencia del imputado se desprenda de resolución ejecutoriada.

CAPITULO II IMPUTACION FALSA DE HECHOS Y SIMULACION DE PRUEBAS

Artículo 287.- La misma pena del artículo anterior se impondrá al que con el propósito de que una persona sea inculpada ante la autoridad como responsable de un delito le impute falsamente un hecho, o simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad.

CAPITULO III FRAUDE PROCESAL

Artículo 288.- Al que para obtener una resolución judicial o administrativa contraria a la ley, de la que derive algún perjuicio o beneficio indebidos, simule un acto jurídico o escrito judicial o altere algún elemento de prueba o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad, se le impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de cincuenta a cuatrocientos días multa.

CAPITULO IV FALSEDAD ANTE AUTORIDAD

Artículo 289.- Al que habiendo otorgado, ante la autoridad, protesta de que en sus declaraciones se conducirá con verdad, se conduzca con falsedad, u oculte la verdad al declarar o en cualquier acto ante la autoridad, se le impondrá prisión de seis meses a tres años.

Artículo 290.- Si antes de la resolución correspondiente, la persona se retracta espontáneamente de sus declaraciones falsas, la pena se disminuirá en dos terceras partes.

Artículo 291.- Al que presente testigos falsos, o logre que un testigo, perito, intérprete o traductor falte a la verdad al declarar ante la autoridad respectiva, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de trescientos a quinientos días multa.

Al perito, intérprete o traductor además de la pena prevista en los artículos anteriores, se le suspenderá de seis meses a dos años del derecho a ejercer como perito, intérprete o traductor.

* CAPITULO V VARIACION DEL NOMBRE O DOMICILIO

Artículo 292.- Se aplicará prisión de seis meses a dos años o de noventa a ciento cincuenta días de trabajo en favor de la comunidad al que ante una autoridad en ejercicio de sus funciones:

I.- Oculte o niegue su nombre o apellidos o se atribuya uno distinto del verdadero;

II.- Oculte o niegue su domicilio o designe como tal uno distinto del verdadero.

CAPITULO VI DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 293.- Cuando con base en la simulación de pruebas o en la denuncia, querrela, imputación o declaraciones falsas, se dicte una sentencia penal de condena, se aplicará al falsario la misma sanción impuesta en dicha sentencia penal de condena, en caso de que éste hubiese sido inocente, además de la pena que le corresponda por el delito cometido.

TITULO SEPTIMO DELITOS CONTRA EL EJERCICIO LEGITIMO DE LA AUTORIDAD

CAPITULO I IMPOSICION FORZADA DE UN ACTO ILEGAL

Artículo 294.- Se impondrá de dos a cinco años de prisión y multa de cien a trescientos días multa a quien obligue a la autoridad por medio de la violencia física o moral, a ejecutar un acto propio de sus atribuciones, sin los requisitos legales, o un acto que no esté dentro de sus atribuciones.

**CAPITULO II
DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES**

Artículo 295.- Al que sin causa legítima rehúse prestar un servicio al que la ley le obliga, o desobedezca un mandato legítimo de la autoridad, se le impondrá prisión de seis meses a un año.

Artículo 296.- Al que por medio de la violencia física o moral se oponga a que la autoridad pública o sus agentes, ejerzan alguna de sus atribuciones, que se realicen en forma legal, o resista el cumplimiento de un mandato legítimo de la autoridad, que satisfice todos los requisitos legales se le aplicará prisión de dos a cuatro años.

Artículo 297.- Al que debiendo declarar ante la autoridad, se niegue a declarar o a otorgar la protesta de ley al rendir su declaración, se le impondrá de treinta a noventa días de trabajo en favor de la comunidad.

Artículo 298.- Cuando la ley autorice el empleo de medidas de apremio para hacer efectivos los mandatos de la autoridad, la consumación de los delitos de desobediencia y resistencia de particulares se producirá en el momento en que se agote el empleo de tales medidas de apremio.

**CAPITULO III
OPOSICION A QUE SE EJECUTE
ALGUNA OBRA O TRABAJO PUBLICOS**

Artículo 299.- Al que con actos materiales trate de impedir la ejecución de una obra o un trabajo públicos, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le aplicará de sesenta a ciento ochenta días de semilibertad.

Quando el delito se cometa por varias personas de común acuerdo, se aplicará de uno a dos años de prisión. Si se usare violencia, se le aplicará de dos a tres años de prisión, sin perjuicio de las sanciones aplicables al delito que resulte cometido.

**CAPITULO IV
QUEBRANTAMIENTO DE SELLOS**

Artículo 300.- Al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad, se le aplicará de sesenta a ciento veinte días de semilibertad.

**CAPITULO V
ULTRAJES A LA AUTORIDAD**

Artículo 301.- Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrá de noventa a ciento ochenta días de semilibertad.

**TITULO OCTAVO
DELITOS CONTRA EL RESPETO DE LOS
SIMBOLOS INSTITUCIONALES**

**CAPITULO I
USO INDEBIDO DE CONDECORACIONES O UNIFORMES**

Artículo 302.- Se impondrá de noventa a ciento ochenta días de semilibertad, al que públicamente y sin derecho, use uniforme, insignia, distintivo o condecoración oficial.

**CAPITULO II
ULTRAJES Y USO INDEBIDO DE INSIGNIAS PUBLICAS**

Artículo 303.- Al que ultraje las insignias del Estado o de un municipio, o de cualesquiera de sus instituciones, o haga uso indebido de ellos, se le aplicarán de treinta a noventa días de trabajo en favor de la comunidad.

**TITULO NOVENO
DELITOS CONTRA EL EQUILIBRIO
VITAL DE LA NATURALEZA**

**CAPITULO UNICO
DELITOS CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLOGICO
Y LA PROTECCION DEL AMBIENTE**

Artículo 304.- Al que realice cualquiera de las conductas previstas como delictuosas en la legislación federal sobre equilibrio ecológico y protección al ambiente, que afecte al Estado de Tabasco y corresponda a la jurisdicción de éste, se le aplicarán de tres meses a seis años de prisión y multa de cien a mil días multa.

Si ocurren las calificativas previstas en aquella legislación, las sanciones se podrán incrementar hasta en una mitad.

**TITULO DECIMO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA**

**CAPITULO UNICO
AFECTACION DE LA SEGURIDAD COLECTIVA
POR INCENDIO EXPLOSION O INUNDACION.**

Artículo 305.- Al que por incendio, explosión, inundación o por cualquier otro medio, afecte la seguridad de las personas o los bienes, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de doscientos a quinientos días multa, sin perjuicio de las sanciones aplicables al daño ocasionado.

**TITULO DECIMOPRIMERO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNICACION**

**CAPITULO I
INTERRUPCION O DIFICULTAMIENTO DEL
SERVICIO PUBLICO DE COMUNICACION**

Artículo 306.- Para los efectos de este capítulo son vías y medios de comunicación y transporte de jurisdicción local, los así considerados por la legislación del Estado de Tabasco.

Artículo 307.- Se aplicará prisión de seis meses a cinco años y multa de cuarenta a cien días multa, a quien interrumpa o dificulte el servicio público de comunicación de cualquier vía o medio de comunicación.

- I.- Alguna vía local de comunicación;
- II.- Algún medio local de transporte público de pasajeros o de carga, o
- III.- Cualquier otro medio local de comunicación.

Si el transporte a que se refiere la fracción II de este artículo estuviere ocupado por una o más personas, las sanciones se aumentarán en una tercera parte.

Artículo 308.- Se aplicará prisión de seis meses a cuatro años y multa de cuarenta a cien días multa al que interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación:

- I.- Obstaculizando alguna vía local de comunicación;
- II.- Secuestrando o reteniendo algún medio local de transporte público de pasajeros o de carga, o cualquier otro medio local de comunicación.

Artículo 309.- Al que por cualquier medio dañe, altere o interrumpa la comunicación telegráfica o telefónica, o la producción o transmisión de energía, voces o imágenes, que se presten como servicio público local, se le aplicará prisión de seis meses a dos años.

Artículo 310.- Al que ponga en movimiento un medio de transporte, provocando un desplazamiento sin control que pueda causar daño, se le aplicará de sesenta a ciento veinte días de trabajo en favor de la comunidad.

Artículo 311.- Al que por cualquier medio destruya total o parcialmente una aeronave, una embarcación o cualquier otro vehículo de servicio público local, si

se encontrare ocupado por una o más personas, se le impondrá de uno a seis años de prisión y multa de treinta a quinientos días multa. Si el vehículo estuviere desocupado la sanción se reducirá en una mitad. Lo previsto en este precepto se aplicará sin perjuicio de la sanción que corresponda por el daño causado.

Artículo 312.- Al que para la realización de actividades delictivas utilice instalaciones o medios de comunicación o de transporte públicos que sean de su propiedad o que tenga bajo su cuidado, se le aplicarán de dos a cuatro años de prisión.

CAPITULO II SUPRESION DE DISPOSITIVOS O DE SEÑALES DE SEGURIDAD

Artículo 313.- Se aplicará prisión de seis meses a dos años al que destruya, inutilice, quite o modifique algún dispositivo o señal de seguridad de una vía local de tránsito.

CAPITULO III CONDUCCION INDEBIDA DE VEHICULOS

Artículo 314.- Al que, en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, maneje un vehículo de motor e incurra en cualquier otra infracción de reglamentos en materia de tránsito de vehículos, se le impondrá prisión de tres meses a un año y suspensión de uno a tres años del derecho de conducir vehículos.

Si el vehículo es de transporte público de pasajeros o de carga, la prisión será de uno a tres años y la suspensión de uno a cuatro años.

CAPITULO IV VIOLACION DE CORRESPONDENCIA

Artículo 315.- Al que abra o intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, se le impondrá de treinta a noventa días de trabajo en favor de la comunidad.

No se sancionará a quienes en ejercicio de la patria potestad, tutela o custodia, abran o intercepten las comunicaciones escritas dirigidas a las personas que se hallen bajo su patria potestad, tutela o custodia.

CAPITULO V VIOLACION DE LA COMUNICACION PRIVADA

Artículo 316.- Al que intervenga la comunicación privada de terceras personas, a través de medios eléctricos o electrónicos, se le aplicará prisión de uno a cinco años.

CAPITULO VI INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE TRASLADAR COMUNICACIONES AL DESTINATARIO

Artículo 317.- Se aplicará prisión de seis a nueve meses de semilibertad al empleado de un servicio público de comunicación; que no transmita o no entregue una comunicación al destinatario, o no la envíe a la oficina que deba hacer la entrega al destinatario.

Si de la omisión resulta un daño o perjuicio, la sanción se incrementará en una mitad sin menoscabo de la reparación de daños y perjuicios que proceda, salvo que resulte la comisión de otro delito, en cuyo caso se aplicará la sanción prevista para éste.

TITULO DECIMOSEGUNDO DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

CAPITULO I FALSIFICACION DE TITULOS O DOCUMENTOS DE CREDITO PUBLICO

Artículo 318.- Se aplicará prisión de dos a seis años y multa de noventa a doscientos días multa al que:

I.- Falsifique o altere, acciones, obligaciones u otros documentos de crédito público estatales o municipales, o cupones de interés o de dividendos de estos títulos, o

II.- Introduzca al Estado o ponga en circulación: obligaciones u otros documentos de crédito público estatales o municipales, o cupones de interés o de dividendos de esos títulos, falsificados o alterados.

CAPITULO II FALSIFICACION DE SELLOS, MARCAS, CONTRASEÑAS O LLAVES Y OTROS

Artículo 319.- Se impondrá prisión de seis meses a tres años y multa de noventa a doscientos días multa al que:

I.- Falsifique o altere los sellos, marcas, llaves, estampillas, troqueles, cuños, matrices, planchas, contraseñas o boletos oficiales;

II.- Use los objetos falsificados o alterados señalados en la fracción anterior;

III.- Use indebidamente los verdaderos sellos, marcas, llaves, estampillas, troqueles, cuños, matrices, planchas, contraseñas o boletos oficiales, o

IV.- Altere las inscripciones, signos u otros medios de identificación de vehículos.

CAPITULO III USURPACION DE PROFESION

Artículo 320.- Se impondrá prisión de uno a tres años o de noventa a ciento ochenta días de trabajo en favor de la comunidad a quien se atribuya públicamente el carácter de profesionista, sin serlo, y ofrezca públicamente sus servicios como tal, o realice actividades propias de una profesión sin tener la correspondiente autorización legal.

TITULO DECIMOTERCERO DELITOS CONTRA LA AUTENTICIDAD O VERACIDAD DOCUMENTAL

CAPITULO I FALSIFICACION DE DOCUMENTOS

Artículo 321.- Se aplicará prisión de seis meses a tres años y multa de noventa a ciento ochenta días multa al que, para obtener un beneficio o causar un daño:

I.- Emita un documento público no auténtico;

II.- Haga constar, en un documento público hechos, acciones, omisiones o circunstancias total o parcialmente falsas, o manifestaciones total o parcialmente distintas de las expresadas por su autor;

III.- Indebidamente haga u omita hacer constar, en un documento público auténtico: hechos, acciones, omisiones o circunstancias verdaderas, o las manifestaciones de una persona;

IV.- Se atribuya o atribuya a un tercero, en un documento público o privado, un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la autenticidad del documento o para la existencia o validez del acto. La misma sanción se aplicará al tercero, si se actúa en su representación o con su consentimiento.

V.- Haga constar, en un documento privado, una falsa transmisión de un derecho real, o

VI.- Altere, oculte o destruya un documento público o privado auténtico y veraz.

Se incrementará en una mitad la pena prevista en este artículo cuando la falsificación sirva como medio para el comercio de vehículos robados o de sus partes o componentes.

Artículo 322.- Se aplicará trabajo en favor de la comunidad de noventa a ciento ochenta días y multa de treinta a noventa días multa al médico que falsamente haga constar en un documento que una persona padece una enfermedad u otra afectación suficiente para dispensarla de cumplir una obligación legal o hacerla adquirir un derecho.

Artículo 323.- Se aplicará prisión de uno a tres años y multa de treinta a noventa días multa al que, para obtener un beneficio o causar un daño:

I.- Produzca, por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces total o parcialmente falsos, o

II.- Indebidamente produzca, por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces verdaderas.

CAPITULO II USO DE DOCUMENTO FALSO

Artículo 324.- Se aplicará prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento veinte días multa al que, por sí o por medio de otro, use un documento público o privado no auténtico o no veraz.

CAPITULO III USURPACION DEL USO DE DOCUMENTO

Artículo 325.- Se aplicará prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento veinte días multa al que, para obtener un beneficio o causar un daño, use un documento público o privado auténtico y veraz, expedido a favor de otra persona.

CAPITULO IV CORUPCION DE MENORES

Artículo 326.- Cuando alguno de los delitos previstos en este Título sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o fedatario se le impondrá, además, destitución e inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público de dos a cinco años.

TITULO DECIMOCUARTO DELITOS CONTRA LA MORALIDAD PUBLICA

CAPITULO I LENOCINIO Y TRATA DE PERSONAS

Artículo 327.- Se aplicará prisión de dos a seis años y multa de quinientos a setecientos días multa al que obtenga algún beneficio económico explotando en cualquier forma el comercio carnal de las personas.

Si la persona explotada es menor de diecisiete años la prisión será de tres a nueve años.

Artículo 328.- Cuando se cometan los delitos previstos en el artículo anterior, sin el consentimiento, mediante engaño o violencia física o moral, o valiéndose el agente de la autoridad que ejerce sobre aquél, o de la función pública que tiene, la sanción se aumentará de uno a tres años.

CAPITULO II CORUPCION DE MENORES

Artículo 329.- Se aplicará prisión de tres a ocho años al que procure o facilite en un menor de diecisiete años, o de una persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.

I.- La iniciación en la vida sexual, cuando, además, es impúber;

II.- La perversión sexual;

III.- La práctica de la prostitución o de la mendicidad.

Artículo 330.- Se aplicará prisión de tres a diez años al que instigue, ayude o incorpore a un menor de diecisiete años:

I.- A la ebriedad, o al uso de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias nocivas a la salud, o

II.- A cometer algún delito, o a formar parte de una asociación delictuosa o de una pandilla.

Artículo 331.- Cuando los actos de corrupción a los que se refieren los artículos 329 y 330, se realicen reiteradamente sobre el mismo menor o incapaz y como consecuencia de ello, éstos adquieran las prácticas o incurran en los delitos anotados en la fracción II del artículo 330, la sanción se aumentará en una mitad.

La pena se aplicará sin perjuicio de la que corresponda conforme a los artículos 224 o 225.

Artículo 332.- Al que utilice los servicios de un menor de diecisiete años en algún lugar naturalmente nocivo para su sana formación psicosocial, se le impondrá prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientos días multa. Las mismas penas se aplicarán a quien permita el acceso de los menores de diecisiete años a espectáculos, obras gráficas o audiovisuales de carácter pornográfico.

Artículo 333.- Al que acepte que su hijo o pupilo menor de diecisiete años preste sus servicios en algún lugar naturalmente nocivo para su sana formación psicosocial, se le impondrá prisión de dos a cuatro años.

Artículo 334.- Si el corruptor tiene alguna relación de autoridad de hecho o de derecho sobre el menor se duplicará la sanción correspondiente y se le aplicará, además, suspensión de dos a cinco años de los derechos inherentes a la patria potestad sobre todos sus descendientes y privación definitiva del derecho a ser tutor o curador.

TITULO DECIMOQUINTO DELITOS CONTRA EL RESPETO A LOS MUERTOS

PROFANACION DE CADAVER

Artículo 335.- Se aplicará prisión de seis meses a tres años al que:

I.- Destruya, mutila, oculte, vilipendie o use un cadáver o restos humanos;

II.- Sustraiga o esparza ilegalmente las cenizas de un cadáver o restos humanos, o

III.- Ilegalmente sepulte o exhume un cadáver o restos humanos.

Artículo 336.- Se aplicará prisión de seis meses a cuatro años al que realice actos de necrofilia. Si dichos actos consisten en la realización de la cópula la prisión será de tres a siete años.

CAPITULO II PROFANACION DE TUMBA

Artículo 337.- Se aplicará prisión de nueve meses a dos años al que viole o vilipendie el lugar donde está colocado en forma permanente un cadáver, sus cenizas o restos humanos.

I.- Invite formal y directamente a una rebelión.

II.- Residiendo en territorio ocupado por el Gobierno del Estado; oculte o auxilie a los espías o exploradores de los rebeldes;

III.- Rotas las hostilidades y estando en las mismas condiciones, mantenga relaciones con el enemigo, para proporcionarle noticias concernientes a las operaciones militares, y a otras que les sean útiles, o

IV.- Voluntariamente sirva un empleo, cargo subalterno o comisión en el lugar ocupado por los rebeldes.

Artículo 358.- A los servidores públicos o agentes del gobierno y a los rebeldes que después del combate causen directamente, o por medio de órdenes, la muerte de los prisioneros, se aplicará prisión de quince a treinta años y multa de cincuenta a quinientos días multa.

Artículo 359.- Cuando durante una rebelión se cometan los delitos de homicidio, robo, secuestro, despojo, incendio, saqueos u otros delitos, se aplicarán las reglas del concurso. Los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate; pero de los que se causen fuera del mismo serán responsables, tanto el que los mande como el que los permita y los que inmediatamente los ejecuten

Artículo 360.- No se aplicará sanción a los que depongan las armas antes de ser tomados prisioneros, si no hubiesen cometido alguno de los delitos mencionados en el artículo anterior.

Artículo 361.- A los extranjeros que cometan el delito de rebelión, además de las penas que les correspondan, se solicitará su expulsión de la República a las autoridades federales una vez cumplidas aquellas.

CAPITULO II TERRORISMO

Artículo 362.- Al que utilizando explosivos, substancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o cualquier otro medio violento realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o menoscabar la autoridad del Estado, la integridad de su territorio o el orden constitucional, o presionar a la autoridad para que tome una determinación, se le impondrá prisión de dos a cuarenta años, multa de cien a quinientos días multa y suspensión de derechos políticos hasta por diez años.

CAPITULO III SABOTAJE

Artículo 363.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión, de cien a quinientos días multa y suspensión de derechos políticos hasta por siete años, al que con el fin de trastornar gravemente la vida económica, social o cultural del Estado o para alterar la capacidad de éste para asegurar el orden público, dañe, destruya o entorpezca:

I.- Servicios públicos o centros de producción o distribución de bienes y servicios básicos;

II.- Elementos fundamentales de instituciones de docencia o investigación, o

III.- Recursos esenciales que el Estado destine para el mantenimiento del orden público.

CAPITULO IV ASONADA O MOTIN

Artículo 364.- A los que para conseguir que se les reconozca o conceda algún derecho, se reúnan en forma tumultuaria y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación, se les sancionará con prisión de seis meses a siete años y multa de cincuenta a doscientos días multa.

CAPITULO V SEDICION

Artículo 365.- Se aplicará prisión de seis meses a ocho años y multa de cincuenta a doscientos días multa, a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, hagan resistencia o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 355 de este Código.

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición, se les aplicará la pena de cinco a quince años de prisión y hasta cuatrocientos días multa.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este Código entrará en vigor el día primero de mayo de Mil Novecientos Noventa y Siete.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Código.

TERCERO.- Se abroga el Código Penal de Tabasco, publicado en el Suplemento al Periódico Oficial número 5162 de fecha 29 de febrero de 1992.

CUARTO.- Los delitos cometidos durante la vigencia del Código que se deroga, se castigarán conforme a sus disposiciones, salvo que las del presente Código favorezcan al o a los inculpados o que éstos manifiesten su voluntad de acogerse a las mismas.

QUINTO.- Para la ejecución de sentencias, seguirá el Título Cuarto del Libro Primero, del Código Penal del 29 de febrero de 1992, en lo que no resulte contrario al presente Código, hasta en tanto se expida la ley reglamentaria en materia de ejecución de sentencias.

SEXTO.- En todo lo no previsto en este Código pero si en leyes especiales con disposiciones de carácter penal, se aplicarán éstas

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.- G. LIC. PEDRO JAVIER RESÉNDEZ MEDINA, DIPUTADO PRESIDENTE.- C. LIC. GONZALO ZENTELLA DE DIOS, DIPUTADO SECRETARIO.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

EXPEDIDO EN EL PALACIO DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.

LIC. ROBERTO MADRAZO PINTADO.

LIC. VÍCTOR MANUEL BARCELÓ RODRÍGUEZ,
SECRETARIO DE GOBIERNO.



El Periódico Oficial se publica los miércoles y sábados bajo la coordinación de la Dirección de Talleres Gráficos de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Las Leyes, Decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicados en este Periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 53-10-47 de Villahermosa, Tabasco.